

# DEMOCRACIA E INTEGRACION NACIONAL



Julio Cotler

INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS

# **democracia e integración nacional**

*Julio Cotler*

INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS

COLECCION MINIMA / 8  
Colección dirigida por  
JOSE MATOS MAR  
Director del Instituto de Estudios Peruanos

© IEP ediciones  
Horacio Urteaga 694, Lima 11  
Telf. 32-3070 / 24-4856

Impreso en el Perú  
1ra. edición, junio 1980

*democracia  
e integración nacional*

## contenido

Introducción	9
Estado y sociedad oligárquica	12
Paso de vencedores ... ¿patria en barbecho?	43
¿Quis custodiam custodiet?	66
Balance y perspectivas	83
Post-scriptum	90

## introducción

Desde que en 1968 se instaló el gobierno de las Fuerzas Armadas éste ha persistido, hasta hace poco, en hacer valer su naturaleza revolucionaria. El comando político-militar ha declarado, reiteradamente, que su profusa legislación tenía por objetivo erradicar "las estructuras tradicionales", fundamento del atraso generalizado del país —el subdesarrollo— y la subordinación a los centros imperiales —la dependencia. Fenómenos que se reforzaban mutuamente y que, a su vez, constituían bases de las fracturas dentro y entre las clases de la sociedad, de su continuo y creciente

Este trabajo es la revisión de la ponencia presentada en la reunión "The Peruvian Experiment Reconsidered", en noviembre de 1978, en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, Smithsonian Institution, Washington.

hostigamiento, amenazando la existencia de la sociedad y el Estado.

Estas situaciones de ruptura y de enfrentamiento sociales impedirían, a su vez, convocar y movilizar esfuerzos colectivos para enfrentar los problemas del subdesarrollo, la dependencia y los afanes geopolíticos de naturaleza expansionista de los países vecinos.

La jefatura del gobierno y su base institucional de sustento —el alto mando castrense— con el apoyo de ideólogos, propagandistas y técnicos, proclamaron la realización de un proyecto de dimensiones históricas, original, "que guardara su plena autonomía conceptual" respecto a otros procesos de transformación social, en su afán de cortar el nudo gordiano que ahogaba el desarrollo nacional. De esta manera, la dirección militar subrayaba el carácter singular, experimental, de su revolución.

Hoy, después de doce años de experimento, es evidente el fracaso militar para resolver los problemas de la integración nacional y política de la sociedad, peruana. Este trabajo que persigue explicar el origen y desarrollo de esta revolución original, así como los factores que condicionaron su desenlace, se inicia planteando algunas de las características más notorias del problema de la integración nacional y política del Perú; cómo llegó a constituirse en el centro de atención y cómo fue encarado por diferentes sectores de la sociedad y, en particular, por los militares.

A partir de este examen de las principales constantes políticas contemporáneas, y que condicionaron la actuación del gobierno militar, en las sucesivas partes se traza el perfil del proceso que los militares iniciaron, las reacciones suscitadas y los resultados obtenidos.



## estado y sociedad oligárquica

En otra oportunidad <sup>1</sup> planteamos que la cuestión central del problema histórico del Perú puede definirse, apretadamente, en la carencia de un grupo rector capaz de realizar de manera sostenida un proceso de integración nacional y política de la sociedad peruana.

Por esto entendemos el hecho que el Perú no ha contado en su historia con una clase dirigente con capacidad y voluntad para realizar las siguientes tareas:

*i.* Acelerar el desarrollo capitalista, en extensión y profundidad, para permitir la relativa homogeneización de la estructura productiva, de la organización y las relaciones entre clases sociales, que culminara con un mercado integrado.

1. Julio Cotler, *Clases, Estado y Nación en el Perú*, IEP, Lima, 1978.

*ii.* Incorporar progresivamente las exigencias populares a la vida del Estado; creando consenso entre gobernantes y gobernados, entre dominantes y dominados sobre la legitimidad del Estado, asentando así los límites y procedimientos institucionales de la participación política.

*iii.* Unificar la población y el territorio mediante una efectiva centralización estatal para erradicar la fragmentación cultural existente entre las clases y sus concomitantes étnicos, favoreciendo la constitución de una identidad colectiva, la nación peruana.

Es decir, las clases dominantes peruanas, a lo largo de la historia republicana no lograron organizar a la población alrededor del Estado, a fin de lograr objetivos (aparentemente) comunes, ni tampoco lograron crear la imagen de un Estado (supuestamente) representante de los intereses colectivos. En pocas palabras, dichas clases no fueron capaces de incorporar y acomodar las exigencias populares a la actividad estatal, realizando un proceso de relativa democratización de la sociedad y política peruanas.

Muy al contrario, la respuesta que los dominantes y el Estado han sabido y podido ofrecer a las exigencias populares son desprecio y represión, generando violencia y desesperación. De ahí que el carácter oligárquico, exclusivo, viniera a ser la definición más característica del Estado peruano. Situación que ha producido un permanente alejamiento, desconfianza y

enfrentamiento populares, y constituye en los últimos cincuenta años el cimiento de la inestabilidad política del país.

## I

Si bien la escisión y oposición entre el Estado y las clases populares viene desde muy atrás, debido a que los propietarios guardaron celosamente su "herencia colonial", es conveniente ahora referimos a algunos factores que se sumaron para definir el problema tal como lo conocemos hoy.

A fines del siglo y a instancias de la expansión del mercado internacional se inició una lenta *penetración* del capitalismo en el Perú, que marcó la emergencia de una débil "burguesía" comercial y agraria que logró, dificultosamente, participar en el control del reducido y débil aparato estatal.

Así, el capitalismo peruano no resultó de las contradicciones creadas por una dinámica interna, sino que respondió a un condicionamiento externo. Por tal razón y por sus orígenes sociales, la emergencia de la capa burguesa del conjunto de propietarios no significó un enfrentamiento con los intereses terratenientes. Al contrario, fue una mutua adecuación, aunque inestable. Esta situación configuró que la sociedad siguiera teñida de un tono definitivamente pre-capitalista, señorial, en el que destacaban relaciones de explotación social y étnica del campesinado, bajo modalidades claramente coloniales.

De ahí precisamente que este nuevo sector, que a falta de una mejor denominación hemos calificado de "burgués", no fuera ni "creador" ni "conquistador" y al contrario, siguiendo la mejor tradición colonial; se desarrollara a expensas de las prebendas gubernamentales. Glosando a Pareto, puede decirse que esta "burguesía" dominaba por los favores políticos que sabía granjearse y no por el hierro que sabía producir.

En estas condiciones se insertó en el país el capital extranjero, organizando el patrón de exportaciones agrario-minero, sin que los propietarios ni el Estado tuvieran intervención alguna, ni capacidad de negociar dicha incorporación. De ahí el rápido y fácil monopolio que alcanzaron unas pocas empresas extranjeras del aparato productivo capitalista.

Estas empresas se extendieron hasta abarcar la banca, el comercio internacional y los transportes, sin propagar sus efectos a la incipiente industria y al sector agrario que no estuviera dedicado a las exportaciones. Es decir, el capital extranjero penetró en el país sin promover la profundización del capitalismo, en tanto no facilitó la elevación de la productividad ni la transformación de las relaciones sociales en diferentes sectores económicos, ni tampoco una integración vertical entre ellos que resultara en la integración nacional del mercado. En este sentido, y *sólo en este sentido*, el capitalismo que las empresas monopólicas extranjeras implantaron en el país tuvo características de *enclave*.

Es obvio que dichas tareas no eran de competencia de estas empresas, sino de una "burguesía nacionalista". No podía ser de otra manera, puesto que el objetivo del capital monopolístico extranjero era obtener materias primas a bajo costo de producción, mediante equipos importados, a fin de transformarlas industrialmente y realizar en sus países de origen, la reproducción del capital. Así, el ciclo del capital que se *iniciaba* en el Perú, se *completaba* en otras fronteras.

La "ventaja comparativa" de estas empresas extranjeras estaba dada por los bajos salarios del trabajador peruano —"el cholo barato"— en relación a los niveles existentes en los países metropolitanos. Esto era posible gracias a que las oportunidades de empleo asalariado de la población eran, por decir lo menos, muy escasos, en razón de la extensión del pre-capitalismo. Así, éste se constituyó en un reservorio de mano de obra y proveedor de alimentos que facilitaban el mantenimiento de bajos salarios relativos. De esta manera, entre capitalismo y pre-capitalismo se dio una articulación de intereses que mutuamente se reforzaban, bajo la égida de la dinámica formulada por el primero.

Por otro lado, la "burguesía" peruana encontró en esta incorporación del capital extranjero una nueva oportunidad de aprovechar los resquicios que le permitían para enriquecerse, sin tener que desarrollar una vocación de agente de transformación de la estructura social existente. Así, los burgueses actuaron

como abogados, representantes políticos y socios menores, como clientes de estos nuevos habilitadores, a cambio de lo cual podían lograr un nuevo tipo de prebendas, lo que reforzaba su condición señorial, haciendo más definida la escisión respecto a la población popular.

La penetración del capitalismo en el Perú produjo un proceso de relativo dislocamiento en unas regiones, pues a la vez que significaba la eliminación de comunidades campesinas, terratenientes, pequeños propietarios, artesanos y comerciantes, condicionaba una parcial proletarización y movilidad de la mano de obra, mientras que en otras regiones se reforzaba y recomponía un nuevo, proceso de enfeudamiento campesino. Fue esta reestructuración la que provocó el inicio de la movilización política popular en las postrimerías de la segunda década.

Fue entonces, también, cuando culminó la escisión de la clase propietaria, en la que se destacó un sector que arrastró a la reducida y segmentada población popular urbana, políticamente movilizada, en contra de la fracción representante de los propietarios que pretendía restringir el desarrollo del capital y la participación extranjera, y que culminó con su exclusión de la vida política.

La coalición entre la fracción triunfante de los propietarios, dirigidos por el presidente Augusto B. Leguía, y las clases populares movilizadas, pareció se-

ñar el comienzo de su incorporación política en el Estado, hecho que rápidamente se frustró, pues significaba la implantación de medidas que alterarían el carácter de la sociedad peruana. La intención de Leguía era favorecer la expansión del capitalismo sin afectar las bases sociales de dominación señorial", sobre la que se montaba el patrón exportador. De esta manera, el "oncenio" de este dictador resultaba una prolongación del proyecto civilista del siglo pasado, que tendría continuadores hasta mediados de siglo.

Esta situación significó que los sectores populares, movilizados por el dislocamiento social, se fueran liberando de la subordinación al movimiento dirigido por Leguía y se fueran entroncando con el pensamiento y la acción desplegados por Haya de la Torre y Mariátegui.

La recomposición de la sociedad y de las fuerzas políticas, sumada a la crisis de 1930, condicionaron la eclosión de la movilización política de reducidos sectores populares y medios en unas pocas ciudades, y en los centros agrarios y mineros con fuerte concentración proletaria. Esta insólita participación puso de manifiesto la contradicción entre los intereses dominantes que representaba el Estado y los sectores populares que se organizaban en la turbulencia creada por la penetración capitalista.

Por sus rasgos señoriales y la subordinación al, capital extranjero, la burguesía y el Estado no contaban

con la disposición de ánimo, ni con las posibilidades reales para establecer mecanismos, que acomodaran los nuevos intereses populares con los dominantes. Esto habría significado la alteración del patrón de acumulación de las empresas monopólicas, mediante la reducción de sus ventajas comparativas", en un momento de recesión mundial.

De ahí que la única alternativa real del Estado fuera reprimir el movimiento popular, dejando ver su incapacidad política para canalizarlo institucionalmente. Esta situación de incompetencia política del Estado frente al reclamo popular marcó el sucesivo desarrollo de la sociedad peruana.

Ahora sí era evidente el inequívoco carácter oligárquico del Estado, en tanto que excluía completamente los reclamos populares y sólo consideraba los intereses dominantes, en los que destacaban los del capital extranjero. En 1932, cuando la movilización popular encabezada por el APRA enfrentaba la violencia represiva del gobierno, el embajador Dearing escribía a Washington que,

"A personal friend who saw Lanatta late yesterday afternoon told me that he was again trying to obtain from foreign companies the money necessary to pay the expenses of the prisoners the government had been taking, on the theory that law and order were for the benefit



of those companies and that the Government should be assisted by them for that reason".<sup>2</sup>

## II

Las organizaciones desarrolladas por los sectores populares y medios significó el comienzo de la crisis del sistema oligárquico en 1930 y no finalizó sino en 1968, con la instalación del autoproclamado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (GRFA). Su prolongada decadencia estuvo marcada, como se dijo, por la irrupción de las fuerzas populares organizadas alrededor de dos figuras ya clásicas, Haya de la Torre y Mariátegui.

En tanto la contradicción básica de la sociedad era la que oponía a los indiferenciados sectores populares y medios contra el Estado oligárquico, sustentado en la alianza del capital (extranjero) y el pre-capitalismo; Haya de la Torre y su partido, el APRA, representando las perspectivas radicalizadas de la pequeña burguesía urbana, propuso un proyecto de transformación antioligárquico y por lo tanto naciona-

2. "Un amigo personal que vio ayer a Lanatta (Ministro de Hacienda) me contó que estaba tratando, nuevamente, de obtener de las compañías extranjeras el dinero necesario para pagar los gastos de la deportación (de representantes apristas a la Constituyente), en tanto que la ley y el orden eran beneficio de dichas compañías y que por tal motivo el gobierno debía ser ayudado por ellas", State Department *Decimal File on Peru 1929-1937*, Roll N° 1, Washington.

lista y democrático, que sirvió de aglutinante a las movilizaciones populares.

Estas movilizaciones que recogiera, organizara y propugnara el APRA, tuvieron como objetivo inicial eliminar los sectores dominantes y transformar el Estado oligárquico en una organización estatal que favoreciera el desarrollo democrático y nacional de la economía, sociedad y política.

Esta transformación significaba que el Estado asumiera nuevas y vigorosas funciones productivas que, bajo la dirección técnica de profesionales, estableciera un régimen de capitalismo de Estado. Es decir que el Estado debía pasar a desempeñar las funciones que en otros países había realizado la burguesía "conquistadora". Simultáneamente, el nuevo ordenamiento debía auspiciar la emergencia capitalista de las clases medias que, disciplinadas por las regulaciones gubernamentales, se sumarían a la acción del gobierno para ampliar e integrar el mercado interno. Así, a partir de la hegemonía estatal dirigida por la pequeña burguesía, se formaría una burguesía nacional.

La incorporación al Estado de la representación política de las clases "nacionales" y sus reclamaciones produciría un movimiento de aceptación y reconocimiento sociales, otorgándole la necesaria legitimidad para forjar una institucionalidad de naturaleza corporativa que le permitiera arbitrar y resolver los conflictos sociales que se fueran presentando.

La integración de los intereses de la sociedad en el Estado crearía las bases para lograr la constitución de una identidad nacional, cubriendo las particulares diferencias y oposiciones sociales y étnicas de la población.

Sólo entonces, cuando el Estado lograra su fortalecimiento, por el consenso social y la legitimidad resultantes, estaría en condiciones de "contratar" con el capital extranjero, para que éste sirviera de complemento a los esfuerzos ahora sí verdaderamente nacionales.

Mariátegui, en cambio, señaló que el problema del Perú, y de América Latina en general, no radicaba en el carácter oligárquico del Estado, sino en la dominación del capital imperialista que los definía como sociedades semicoloniales. Por tal razón, si apoyaba el desarrollo de una revolución democrática y nacional era porque la concebía como un momento de transición al socialismo. De lo contrario, mirando hacia lo que ocurría en México, Mariátegui anticipaba que el capitalismo "nacional" resultante de esa revolución antioligárquica sería rápidamente absorbido por la dinámica del capitalismo imperialista. Por esta razón, Mariátegui procuró infructuosamente orientar la movilización popular hacia una transformación que erradicara los fundamentos de la explotación clasista, sentando las bases de un proyecto de integración nacional y política sustentado en bases socialistas.

Por diversas razones, entre las que se cuentan el carácter indiferenciado de las clases populares, las proposiciones concretas de Haya y su capacidad de organización aventajaron a las ideas de Mariátegui, más aún cuando sus herederos políticos se alinearon a las directivas de la Internacional Comunista, que respondían fielmente a las directivas concernientes a la defensa de la construcción del socialismo en un solo país.

El Estado oligárquico, por su incapacidad de asimilar institucionalmente el enfrentamiento popular que organizó el APRA, recurrió al Ejército para que asumiera su defensa tal como años más tarde lo reconocieron explícitamente sus dirigentes.

Hasta 1945, finalizada la II Guerra Mundial, no se alteró el enfrentamiento que el Estado oligárquico, a través del Ejército sostenía con las clases populares, movilizadas básicamente en los centros urbanos costeños y organizadas políticamente por el APRA, cuya dirección se caracterizaba, en lo fundamental, por ser de clase media, intelectual, urbana y costeña.

Esta sorda guerra civil dio pie para que el Partido Aprista ganara hegemonía en las clases populares y en importantes sectores medios, incluyendo a grupos de la oficialidad. Su larga clandestinidad condicionó que el partido adoptara un carácter muy jerarquizado, que se manifestaba en el sostenido culto a la personalidad de Haya de la Torre, otorgándole la capacidad de dictar y modificar los principios ideológicos

y líneas de acción según el momento, así como de arbitrar las tendencias que se desarrollaban dentro de la organización.

La excepcional capacidad de organización y movilización del APRA; capaz de competir con la del Ejército, reforzó el rechazo de la clase dominante para establecer formas de mediación política con las clases populares, en tanto se encontraran dirigidas por el partido. A fin de obviar esta situación, los varios gobiernos entre 1930 y 1945 intentaron, a través de tímidas políticas asistenciales y una extendida campaña antiaprista, divorciar a las clases populares de su dirección política, sin que logaran su objetivo.

Sin embargo, el clima democrático alcanzado con la derrota del fascismo en Europa y la movilización popular iniciada por el APRA, obligó a la coalición oligárquica a reconocer legalmente su incorporación a la escena política. Esto significó, como lo habían previsto los más connotados representantes de la oligarquía, que el país experimentase una verdadera conmoción.

La relativa apertura del sistema político a la representación popular ocasionó la multiplicación de organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles, así como la súbita expansión del número de nuevos diarios y revistas, y una inusitada frecuencia de conferencias y reuniones que trataban sobre los problemas que interesaban de cerca a las capas populares y medias

del país, dando lugar a que se constituyera una "opinión pública" opuesta a las afirmaciones que desde púlpitos, cátedras y periódicos expresaban los intereses de los propietarios.

Todo este movimiento se asoció á una sucesión de huelgas laborales en el campo y la ciudad para lograr aumentos salariales, mejores condiciones de vida y de trato patronal, así como de invasiones campesinas a las haciendas reclamando la posesión de la tierra, y de huelgas estudiantiles que perseguían la democratización de la educación.

La lucha de clases se instaló en la vida cotidiana del país, constituyendo un desafío permanente, al Estado carente de los recursos necesarios para satisfacer las exigencias sociales. En estas condiciones, Haya de la Torre intentó vanamente encontrar fórmulas de mediación política con los propietarios, a fin de mantener la práctica parlamentaria que debería permitirle lograr la "transferencia" del poder estatal sin quiebras que amenazaran, nuevamente, con largos períodos de dictaduras militares. Esta preocupación constituyó, en lo sucesivo, el fundamento de la práctica política de la dirección aprista.

Para lograr este propósito la dirección aprista tuvo que postergar *sine die* la realización de su proyecto nacionalista y antioligárquico, difiriendo el inevitable enfrentamiento social que, como se vio en 1948, coincidió con la desmovilización política popular y la desmoralización de las masas apristas que ha-

bían esperado anhelosamente la orden de entrar en batalla. Fue entonces que los propietarios se congregaron alrededor del general Odría y con un nuevo golpe de Estado terminó la experiencia democrática.

La derrota del movimiento popular sirvió para que los sectores radicalizados del APRA, que entonces constituían el núcleo revolucionario del país, asimilaran esta amarga experiencia y concluyeran que la coalición dominante y el Estado oligárquico no cederían en sus atribuciones y, por lo tanto, no cabía sino destruirlas mediante la revuelta popular. Decepcionados por los dirigentes apristas abandonaron el partido, dando lugar a su primera escisión importante e incorporándose a las nuevas organizaciones reformistas surgidas a mediados de los años 50 y a las embrionarias organizaciones de izquierda revolucionaria, que buscaban nuevas alternativas para la transformación de la sociedad y el Estado.

### III

Durante las décadas de 1950 y 1960 el país experimentó una nueva y acelerada penetración capitalista que suscitó la conjunción de viejas y nuevas contradicciones sociales y políticas, que ocasionaron la bancarrota, del régimen de dominación oligárquica a través de soluciones imprevistas.

A principios de los años cincuenta y en razón de los requerimientos del capital extranjero, la dictadura de Odría promulgó una serie de dispositivos legales

que favorecieron importantes inversiones, con la consiguiente alza de las exportaciones de origen extractivo. A mediados de la década, la producción de harina de pescado se constituyó en un nuevo y lucrativo rubro de exportación, que también recibió un sustantivo aporte de capitales extranjeros, interesados en el desarrollo de la industria de alimentos balanceados en sus países de origen.

El dinamismo de las exportaciones significó un relativo crecimiento de los recursos fiscales que el Estado utilizó para incrementar los gastos corrientes y de inversión. De esta manera buscaba satisfacer las exigencias populares urbanas, ampliando el segmento de consumidores de artículos industriales; neutralizar la movilización aprista; y aumentar el número de prebendas entre los clientes de la dictadura, sumándolos a la "burguesía" constituida.

A fines de la década de 1950 el gobierno dictó las primeras medidas para favorecer la industrialización por sustitución de importaciones, en razón de las presiones de las varias capas burguesas que buscaban los medios para reproducir su capital, en tanto eran limitadas las oportunidades de inversión en las exportaciones tradicionales. A estas presiones se sumaron las provenientes de los sectores profesionales "modernos", ansiosos por la industrialización del país, y la de una creciente población urbana en busca de empleo.



Debido carácter de "favor" como se distribuían los permisos de importación de maquinarias y de sobreprotección a la instalación de las nuevas industrias, así como a la escala reducida del mercado, unas cuantas firmas llegaron a controlar cada rama de la producción industrial. Además, debido a que el sector de mayor arrastre potencial, el exportador, se encontraba controlado por empresas capitalistas extranjeras, la actividad industrial se centró en la manufactura de bienes de consumo no duraderos.

Luego, y gracias al dictado de dispositivos legales que amparaban la producción de bienes de consumo durables, rápidamente se instalaron subsidiarias de las modernas empresas multinacionales, con predominio de capital norteamericano. Estas, por intermedio de los créditos que les concedían las filiales bancarias norteamericanas, que pronto captaron proporciones significativas del ahorro nacional, importaron maquinarias, bienes intermedios e insumos de sus casas matrices, a los precios oligopólicos y normas tecnológicas que ellas fijaran, de manera de producir bienes destinados a satisfacer el nuevo estilo de vida, que propagan los medios de comunicación, del segmento de más altos ingresos relativos. Alrededor de estas firmas se desarrollaron empresas satélites, propiedad de la burguesía peruana, que siempre han tenido una significación muy reducida.

La valorización del capital en el mercado peruano, a diferencia de lo que había ocurrido con el desarro-

llo capitalista basado en las exportaciones agro-mine-  
ras, significó un nuevo proceso de concentración del  
aparato productivo industrial y del financiero en ma-  
nos del capital monopolístico transnacional que limitó,  
una vez más y de manera muy significativa, la parti-  
cipación de la "burguesía" peruana y del Estado en el  
proceso de acumulación de capitales. Además, debi-  
do al carácter mismo de la expansión del capitalis-  
mo se intensificó aún más la heterogeneidad y frag-  
mentación del sistema productivo y, en general, de la  
sociedad.

El desarrollo de este nuevo patrón de crecimiento  
capitalista estaba condicionado para favorecer la am-  
pliación del sector medio, capaz de adquirir los bie-  
nes de consumo duradero, y mantener relativamente  
estabilizados los salarios reales. Para esto, los gobier-  
nos que se sucedieron desde 1950 controlaron los pre-  
cios de los alimentos, subsidiando sus importaciones.  
Esta política significó el mayor empobrecimiento de  
los campesinos y terratenientes, y que las provincias  
sufrieran en mayor grado un estado de notoria postra-  
ción. Es decir, que el nuevo patrón de desarrollo se  
disociaba del sector pre-capitalista de la sociedad, al  
que castigaba abiertamente.

Frente a esta situación, los terratenientes serranos  
adoptaron diferentes tipos de decisiones: transfirieron  
el producto de sus rentas a los centros urbanos más  
dinámicos; se deshicieron de sus tierras trasladándose  
a las ciudades, donde se incorporaron a los sectores

profesionales y a la burocracia; o se instalaron como pequeños comerciantes. Sin embargo, la mayoría de los pequeños terratenientes, que no tenían esas posibilidades, pretendieron intensificar los requerimientos a sus dependientes, sin contar como antes con el decidido respaldo político del Estado, cuya mayor preocupación era, defender el desarrollo urbano.

La caída del ingreso rural de la sierra, sumado al progresivo empobrecimiento de la tierra, la presión demográfica y las nuevas exigencias terratenientes dieron paso al desarrollo de una ola de revueltas campesinas en esta región, que concentra al sector pre-capitalista del país, destinadas a recuperar las tierras de las comunidades campesinas que ocupaban las haciendas y eliminar las prestaciones serviles a los hacendados. Simultáneamente a este fenómeno, se incrementó notablemente la migración de la sierra a la costa, del campo a la ciudad, con la consiguiente renovación de las capas obreras, así como la formación de un importante sector urbano de subempleados.

Finalmente, estos cambios estuvieron acompañados por el surgimiento de nuevos sectores medios profesionales, cada vez más diversificados, así como de un sector de pequeños y medianos industriales, que buscaban ampliar el espacio social que hasta entonces les tenía reservado el sistema oligárquico y que sentían reducir por la creciente concentración financiera e industrial.

## IV

Como resultado del tipo de desarrollo capitalista y las nuevas contradicciones que suscitó, desde mediados de la década de 1950 en el escenario político irrumpieron, con fuerza inusitada, el campesinado, en especial el serrano; la clase obrera ampliada; el subproletariado constituido por migrantes, y los nuevos sectores, medios, que asumieron la dirección de las reivindicaciones de dichos sectores populares.

Este fenómeno, resultaba nuevo en la historia del país. Si la crisis de 1990 estuvo signada por la participación de restringidos sectores de las clases populares, a partir de los años cincuenta, y en función del generalizado desplazamiento que conllevó la nueva penetración capitalista, la participación popular tendió a generalizarse en todo el país y en todos los niveles sociales, destacándose la movilización campesina y, en general, la de la población serrana. De esta manera, la creciente participación popular tendía a trastocar el ordenamiento político oligárquico.

Por su constitución, este movimiento social se definió como anti-oligárquico, democrático y nacionalista. En efecto, en el curso de los profundos cambios de la estructura social se promovió una nueva e indiferenciada presión popular tendiente a la democratización de la economía y sociedad, así como a convertir al Estado en representante de sus in-

tereses. Así, se repetía, con fuerza desusada y ampliada la experiencia de 1930.

Este hecho vino a modificar sustantivamente el ordenamiento y alineamiento políticos. El sistema oligárquico había logrado contener y controlar la movilización popular mediante la represión que ejercía la Fuerza Armada sobre bolsones sociales movilizados. Pero no sólo la coerción era su instrumento de dominio. También a través de un extendido y relativamente complejo sistema de clientelismo político delegaba en patronos rurales y urbanos de las diversas instancias políticas, sociales y administrativas del país la facultad de reproducir la dominación social y política de naturaleza oligárquica. Pero, en las nuevas circunstancias de generalizada movilidad social, cultural y política por las que atravesaba la sociedad peruana, ambos recursos resultaron ser notoriamente ineficaces para mantener el orden exclusivo que beneficiaba a sectores muy limitados de la sociedad.

En estas nuevas condiciones, se hacía indispensable que el Estado asumiera *directamente* funciones distributivas de clara naturaleza asistencial a fin de lograr lo imposible: la *legitimidad* y el *consenso social* que facultara la *institucionalización de la participación popular* por canales y cometidos que se adecuaran a los nuevos requisitos del desarrollo capitalista.

Para tal fin era esencial el establecimiento de canales representativos de los sectores populares que acogieran sus demandas y los procesaran a nivel estatal, para establecer nuevos tipos de control político. Es así como en 1956 la clase dominante incorporó al APRA en la actividad estatal, estableciéndose el régimen denominado de "convivencia". Esta incorporación suponía que el partido debía recoger los crecientes y diversos reclamos, morigerarlos, organizarlos y adecuarlos a las "posibilidades reales" del Estado, es decir a los intereses dominantes, asistiendo a los segmentos populares urbanos con mayor capacidad de presión política. Pero si el APRA esperaba ganar con la "convivencia" el espacio político que inútilmente había pretendido alcanzar en 1945 para lograr la "transferencia del poder", le costó el abandono de un grupo de dirigentes radicalizados y que el grueso de la nueva población que se incorporaba a la vida política del país se sintiera traicionada y se sumara a las nuevas fuerzas reformistas que se venían organizando.

En estas condiciones de desafío político al orden dominante, Pedro Beltrán emergió como ideólogo del sistema oligárquico, proclamando la necesidad de asimilar las clases populares a los intereses del Estado, a través de las pautas de una "economía de mercado". Desde las páginas de *La Prensa*, órgano que los principales propietarios nacionales habían adquirido a mediados de los años 40, con el mani-

fiesto propósito de defender sus intereses, Beltrán presentó un programa para, resolver el problema de la incorporación política de la población popular al ámbito de los intereses de los propietarios.

Este programa perseguía, en primer lugar la consolidación del Estado de derecho; como forma de asegurar la institucionalización de la vida política mediante el control ciudadano sobre la actuación de sus representantes políticos (en circunstancias que más de la mitad de la población adulta no contaba con la credencial ciudadana y la propiedad se encontraba concentrada en poder de un pequeño número de empresas). Para lograr el desarrollo del Estado de derecho, es decir el entendimiento institucional de las clases dominadas y dominantes, Beltrán propuso la irrestricta libertad del mercado, puesto que sólo así podía determinarse una eficiente asignación de los escasos recursos del país y promover las iniciativas empresariales de cuantos quisieran entrar en la libre competencia. De este modo, el mercado, al permitir la mayor ganancia a los más capaces y arriesgados, alentaba la inversión y el consiguiente empleo de los trabajadores, lo que, a la larga, favorecería una mejor distribución del ingreso. A esto se sumaría el capital extranjero que no haría sino acelerar la dinámica conducente a la democracia política y al desarrollo económico.

Este planteamiento suponía la reducción al mínimo de las funciones estatales, el mantenimiento

del orden que permitiera el desarrollo del mercado y su expansión, pero sin intervenir en él, ya que esto significaría la burocratización y corrupción del aparato político, con la consiguiente ineficiencia de la producción, que conduciría al desarrollo de tendencias totalitarias, comunistas.

Este programa para desarrollar el capitalismo, destinado a reproducir en el Perú el "milagro alemán", no tuvo significación política, incluso dentro del propio grupo de Beltrán. Debido a su naturaleza de "prebenda" y segundón, éste no estaba dispuesto a perder la protección y favores que el gobierno y las empresas extranjeras le otorgaban. Además, frente a esta plataforma política, el nuevo reformismo que dirigía la movilización política popular desmoronó la exclusiva escena política montada desde principios de siglo, y ahora sustentada por el APRA. Ante el liberalismo de Beltrán, exigía una sustantiva política distributiva que destruyera la cerca oligárquica y para tal fin ponían el acento en la presencia estatal y del capital nacional en el aparato y en los lineamientos productivos, a fin de sacar al país del subdesarrollo y lograr la búsqueda integración de la sociedad y el Estado.

En términos generales, se consideraba que la reforma agraria debía permitir el desarrollo de la producción e ingresos campesinos, lo que redundaría en la ampliación de la demanda industrial. En la medida que el parque industrial y el sistema finan-



ciero estuviesen controlados por el Estado y el capital nacional, conteniendo así el drenaje de capital de las subsidiarias extranjeras, se impulsaría la reinversión interna, con la consiguiente expansión e integración del mercado.

De esta manera, el diagnóstico del subdesarrollo lo daba la dependencia que el país sufría del (capital) *extranjero*. Por lo tanto, se imponía un "cambio de estructuras" que nacionalizara la economía peruana. Además, se introducía la necesidad de crear instituciones capaces de otorgarle al Estado la capacidad efectiva de árbitro social. Es decir, que a través de un nuevo planteamiento se reformulaba el proyecto aprista, en el momento que el partido abandonaba su proyecto estratégico por consideraciones tácticas que se adecuaban al logro de la "transferencia" del poder.

El impulso que las luchas populares dio al proyecto reformista de los nuevos sectores medios fue adoptado por el diado *El Comercio*, que al polemizar con *La Prensa* se ganó el apoyo de las nuevas fuerzas políticas reformistas, así como de importantes sectores de la Iglesia y el Ejército, y el rechazo de las empresas extranjeras y de sus agencias de publicidad. Quedó así en evidencia la división existente dentro del grupo dominante.

*El Comercio*, la Iglesia y el Ejército, poderosos elementos políticos tradicionales, se adhirieron a los planteamientos reformistas en la medida que, por

la cambiante situación social, concebían indispensable la puesta en marcha "desde arriba" del cambio de estructuras, mediante medidas· tecnocráticas que permitieran mantener el "principio de autoridad". De lo contrario, se corría el riesgo que las masas populares, conducidas por el sector revolucionario en formación, realizaran dichas transformaciones, eliminando no sólo la composición oligárquica de la sociedad, sino sus fundamentos capitalistas. El ejemplo de la revolución cubana estaba presente y esas posiciones se encontraban reforzadas por las enseñanzas de CEPAL y las indicaciones de la *Alianza para el Progreso*.

En este escenario surgió en el Ejército la "teoría" de la seguridad nacional. Sólo las reformas sociales que propendían al bienestar y desarrollo podían, servir de baluarte contra el desquiciamiento institucional que significaba la intensificación de la lucha de clases y el desarrollo político autónomo de las clases populares. También, sólo la aplicación de un conjunto orgánico de reformas sociales podía cohesionar a los peruanos y desarrollar sus potencialidades para defenderse de las asechanzas externas: el comunismo ateo, la expansión geopolítica de los Estados vecinos, los gobiernos y las empresas imperialistas que amenazaban disolver la débil entidad nacional.

Es así como la década de 1960 se inició con un generalizado mandato reformista de vastos secto-

res sociales, manifiesto en una abierta crítica al orden que, defendían la burguesía y empresas extranjeras. Es decir, estaba en la orden del día de la agenda política del país la realización de las medidas que el APRA había propugnado en los años 30, posteriormente abandonadas por consideraciones oportunistas.

La elección presidencial de Fernando Belaúnde Terry, en 1963, pareció significar el comienzo de la realización de medidas anti-oligárquicas y nacionalistas. Sin embargo, esta generalizada esperanza muy pronto se vio frustrada. En primer lugar, por la obvia resistencia; norteamericana y la amenaza de represalias al Perú. En segundo lugar, por la sostenida oposición que el gobierno recibiera de la "Coalición" —alianza que el APRA estableció con el general Odría, como continuación del régimen político de "convivencia" y que significara por tercera vez, en un lapso de 20 años, que un grupo de cuadros apristas pasara a militar en las nuevas formaciones reformistas y revolucionarias. En tercer lugar, por el sistemático rechazo del gobierno de responder a esta posición mediante la movilización popular. Es evidente que en esta decisión pesaban las consideraciones autoritarias de los aliados del reformismo: el diario *El Comercio*, la Iglesia y el Ejército, considerando que dicha movilización popular podría disolver la actuación gubernamental ceñida

a normas tecnocráticas, poniendo en peligro el principio de autoridad.

El temprano fracaso del reformismo del gobierno significó, primero que sectores profesionales quedaran defraudados y llegaran al convencimiento que era imposible realizar las medidas previstas en ese ambiente político. Esto motivó que en este grupo se desarrollara una tendencia radical. Segundo, el fracaso reformista sirvió de acicate a la intensificación de las presiones populares, a través de movilizaciones campesinas, obreros y de empleados, en las que se destacaban sectores que se desafiliaban de la dirección reformista tratando de definir una alternativa clasista propia. En este mismo orden de cosas tuvo una decisiva significación que el APRA perdiera su hegemonía en las universidades y que la izquierda revolucionaria en gestación se implantara en dichos centros educativos.

El desarrollo de estas tendencias, aunado al exitoso ejemplo cubano, condicionó el brote guerrillero que, si bien fue rápidamente debelado, conjuntamente con el movimiento campesino, acrecentó la importancia de los servicios de inteligencia militar en las Fuerzas Armadas, afirmando sus posiciones reformistas-tecnocráticas como modo de prevenir el surgimiento de una sublevación popular.

La poca atención de la "clase política" a estos problemas convenció a los servicios de inteligencia que

la solución final de los acuciantes problemas de seguridad nacional no podía alcanzarse a través de un gobierno representativo de las diferentes fracciones partidarias, que no tomaban en cuenta los "intereses globales del Estado".

Mientras tanto, hizo crisis el contradictorio desarrollo capitalista fundado en la industrialización sustitutiva, hecho evidente con el estancamiento de las exportaciones tradicionales y el simultáneo crecimiento de las importaciones industriales y de alimentos. A esto se sumó que, como sucedáneo de las reformas, el gobierno y su oposición respondieran desorganizadamente a las crecientes demandas sociales, incrementando el gasto público mediante el endeudamiento externo. Todo esto provocó problemas en la balanza de pagos, devaluación monetaria y un mayor empobrecimiento relativo de la población, con sus inevitables consecuencias políticas.

En 1967-1968 estas contradicciones llevaron a que, de un lado, se perfilara el aglutinamiento de la izquierda revolucionaria, formándose una central sindical independiente del control aprista —a Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)—. De otro lado, se concretó un acuerdo político entre el APRA y el sector capitalista moderno, representado por los grupos políticos reformistas, que tendía simultáneamente a despejar de la escena política a los terratenientes y sectores medios nacionalistas, poniendo en marcha un proceso de modernización del ca-

pital que buscaba otorgar un espacio relativamente más amplio a los propietarios nacionales, en el contexto de una masiva intervención del capital extranjero.

Pero antes que cualquiera de estas dos alternativas pudiera desarrollarse, un pequeño número de oficiales del Ejército, que ocupaban posiciones estratégicas en los comandos militares, depusieron al tambaleante y desprestigiado gobierno, y arrogándose la representación de su institución constituyeron el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (GRFA).

Estos militares esperaban detener el avance de la izquierda e impedir el desarrollo del proyecto de reconversión del capitalismo, mediante la asociación subordinada del empresario nacional al capital internacional, lo que agudizaría aún más las tensiones sociopolíticas acrecentadas por el impulso del movimiento revolucionario. Pero también dicho golpe de Estado respondía a la necesidad de detener la posibilidad que esa alianza arribara al poder y que, desestimando los problemas de la seguridad nacional, persiguiera subordinar las fuerzas armadas al poder civil.

## V

En resumen, el desarrollo histórico de la sociedad peruana en el presente siglo ha estado sujeto a varios y diferentes ritmos de penetración capitalista, acompañados por sucesivos procesos de dislocamien-

to social, de una creciente y dispar participación política de los sectores medios y clases populares, decididos a reivindicar sus negados derechos ciudadanos.

Por la naturaleza subordinada del Estado al capitalismo monopólico extranjero y su entronque con los terratenientes, éste no dispuso de recursos ni medios institucionales para hacer frente y solucionar dichas reivindicaciones democráticas y nacionales.

Por último, las agrupaciones políticas populares que dirigían los sectores medios, nacidas en los diferentes momentos de dislocamiento social y de insurgencia popular, resultaron ineficaces para resolver los dilemas planteados. Los mecanismos de asistencia segmentaria establecidos resultaron insuficientes para atender los masivos y diversos reclamos populares.

Esto facilitó que en la nueva intelectualidad surgida de las universidades y en los nuevos sectores obreros se desarrollara una tendencia orientada hacia la independencia política de los partidos pequeño burgueses y el planteamiento de una alternativa política propia a sus intereses. De esta manera se comenzó a perfilar, aunque de manera borrosa, una nueva diferenciación política de los intereses sociales, que respondía a la tortuosa marcha del capitalismo en el Perú y a su diferenciación clasista.

Todos estos elementos se sumaron para que se desataran las fuerzas que acabarían con el régimen de dominación oligárquica.

## paso de vencedores... ¿patria en barbecho?

La crisis política del sistema de dominación paralizó la capacidad operativa de las organizaciones políticas y en general del gobierno. Esta oportunidad fue aprovechada por un pequeño grupo de oficiales del Ejército, defraudado por la ineficacia del sistema político para constituir el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (GRFA) y forzar a los comandos de las otras armas a incorporársele.

Este grupo de oficiales justificó su proceder aduciendo la inmoralidad e incapacidad de los "políticos" para solucionar las contradicciones e insuficiencias puestas en evidencia por la movilización popular y, por otro lado, la voluntad así como la capacidad de la fuerza armada, que pretendía representar, para resolver "de una vez por todas" los problemas relativos a la integración nacional y política de la pobla-



ción peruana. Estas virtudes que caracterizarían a los militares se deberían al hecho que, a diferencia de lo que acontecía con los políticos, no se suscribían a intereses particulares de grupo o de clase social, sino a los "grandes intereses generales de la Patria".

Es así como el grupo de oficiales que formó el GRFA se arrogó la representación de las fuerzas armadas, que supuestamente resultaban ser las inspiradoras y conductoras de sus acciones y ante las que sólo debían responder. Es decir, se constituía en juez y parte.

El descalabro político del régimen de dominación y la debilidad de los sectores que perseguían la independencia política de la clase popular, contrastaban notoriamente con la integración de la fuerza armada y su voluntad política, permitiendo que la gestión del comando político-militar se iniciara con un considerable grado de autonomía respecto a la sociedad. Esto le permitiría desarrollar, sin oposición pero también sin apoyo social significativo, una serie de acciones planteadas durante la última década por las varias fuerzas políticas reformistas.

El comando militar asumió funciones y atribuciones de una clase social dirigente que buscaba reordenar la sociedad y el Estado, adecuándolos a sus aspiraciones y propósitos. De esta manera, si el gobierno se redujo a ser el brazo administrativo de las

fuerzas armadas, éstas pretendieron absorber y monopolizar el Estado, encerrando en sus filas toda la vida política de la sociedad peruana.

En este capítulo se presentarán los trazos generales de la actividad estatal que pusieron en práctica los militares para darse un país a su imagen y semejanza, haciendo resaltar los nuevos problemas surgidos y que agotaron sus intentos para controlar el Estado y congelar la vida social y política.

## I

En términos generales el "objetivo militar" era la realización de las incumplidas promesas de los partidos políticos, como modo de eliminar "la dependencia externa y la dominación interna", causantes de la "desunión nacional" y el "desencuentro" entre Pueblo y Fuerza Armada. Esto requería la rápida y sorpresiva realización de una serie de dramáticas reestructuraciones ejecutadas por el aparato administrativo, bajo la estricta dirección, vigilancia y control del aparato castrense.

En la medida que el GRFA dio muestras de sus intenciones reformistas y nacionalistas se le fueron sumando profesionales y militantes de diferentes tendencias, defraudados igualmente por la inoperancia de las organizaciones y del ordenamiento político, así como por sectores radicalizados de la Iglesia. Estos asesores, pese a mantenerse subordinados a las distintas jefaturas militares, desempeñaron decisivas

funciones administrativas y técnicas, así como la creación y difusión de una ideología destinada a enfatizar la orientación anti-oligárquica del gobierno militar.

Si bien esta orientación recogía los aportes que los sectores medios habían venido desarrollando desde la década del 30, los variados cambios que experimentó la estructura social del Perú a partir de los años 50 colocaron a un sector de profesionales, militares y eclesiásticos a la vanguardia de las posiciones reformistas, haciendo posible lo radical de los propósitos y las medidas adoptadas por el GRFA. Pero, en ese mismo sentido, el proyecto de cambios combinaba objetivos generales de naturaleza pequeño burguesa, con objetivos particulares castrenses y católicos. De ahí que en una oportunidad el autor calificara al régimen político que estableció el GRFA como populista y militar.

La naturaleza pequeño burguesa del gobierno militar se fundaba en que su diagnóstico del problema peruano radicaba —como lo había señalado antes el APRA y luego las subsiguientes organizaciones reformistas— en la penetración *extranjera* del capital, que determinaba la subordinación del país a intereses foráneos.

A partir de dicho diagnóstico, el gobierno se abocó al "desarrollo hacia dentro", mediante la erradicación de los enclaves y sus asociados. Pero si en

1930 el capitalismo se concentraba en la producción agro-minera destinada; a las exportaciones, desde la década de 1950 se le superpuso un patrón de acumulación que privilegiaba el desarrollo industrial y el consumo urbano, debilitando las bases sociales y políticas que sustentaban el mantenimiento del orden oligárquico. Así, procurar la eliminación del orden hegemónico válido hasta fines de la década de 1950, y favorecer el desarrollo industrial sin modificar el patrón de acumulación que a partir de entonces se venía instalando en el país, significaba impulsar las nuevas modalidades de la penetración del capitalismo monopólico y extranjero.<sup>3</sup>

Además, el GRFA perseguía el "autodesarrollo" que permitiera establecer una sociedad solidaria —término básico del discurso oficial— entre las clases sociales, bajo la tutela del Estado militar. De ahí la definición de "tercer mundista" del gobierno militar, que rechazaba representar, intereses exclusivos de alguna de las clases y que se tradujo en su autocalificación de "ni capitalista ni comunista". En ese mismo orden de cosas, el gobierno perseguía una solución de equilibrio entre las clases mediante el establecimiento de instituciones de naturaleza corporativa. Sólo así, diría el jefe del Estado, "todos jugaremos con la camiseta bicolor" y "jalaremos la soga desde el mismo cabo".

3. Aníbal Quijano, *Nacionalismo, neoimperialismo y militarismo en el Perú*, Ediciones Periferia, Buenos Aires, 1971.

El ingrediente ideológico de naturaleza católica que suponía la construcción de la Ciudad de Dios, a través de la constitución de entidades "comunitarias", hizo posible que la acción del GRFA se justificara por el nuevo mensaje social de las encíclicas y recibiera el aval político de las autoridades religiosas, desautorizando las acusaciones referentes a una supuesta inspiración comunista del gobierno.

Asimismo, este proyecto pequeño burgués se conjugaba con objetivos estrictamente castrenses. La armonía debía asegurar la seguridad nacional en el "frente interno, al eliminar las "fricciones sociales". La Revolución Peruana, al mismo tiempo, debía eliminar los "obstáculos" que impedían "potenciar" solidariamente la acción defensiva del territorio nacional ante los acechantes vecinos. Cón tal fin el GRFA inició una serie de obras de infraestructura de gran envergadura y larga maduración que, en algunos casos, tenían justificación geopolítica, como la irrigación de Majes y la construcción del oleoducto norperuano. Así, el desarrollo bajo la dirección militar, haría posible encauzar la sociedad en función de consideraciones castrenses relativas a la defensa nacional.

Las medidas anti-oligárquicas y nacionalistas ejecutadas en lo que hoy, eufemísticamente, se denomina la "primera fase de la Revolución", significaron una importante alteración del perfil social y económico del país. En efecto, en el aparato productivo eliminaron la estructura terrateniente, la tradicio-

nal burguesía agraria, comercial y el enclave extranjero. El Estado, que en términos latinoamericanos, tenía una muy reducida participación en la producción, se convirtió en el agente económico de mayor envergadura: mientras que en 1965 la participación, pública en la inversión total era de 16%, diez años más tarde alcanzó el 50%.<sup>4</sup>

El propósito explícito de estas medidas estuvo dirigido a redistribuir la propiedad y los ingresos, y a estimular, la progresiva integración horizontal y vertical de los sectores económicos, permitiendo así el desarrollo de eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, destinados a producir la ampliación profundización y consolidación del autodesarrollo del mercado interno. Esta acción debía ser dirigida, por el Estado en colaboración con la burguesía industrial, liberada del lastre oligárquico. Sin embargo, por sus orígenes sociales y su débil implantación en el aparato productivo, ésta debía supeditarse a los intereses globales definidos por militares y técnicos.

La inversión extranjera en el campo industrial, debidamente controlada, debería aportar capital y tecnología complementarios para alcanzar el mencionado desarrollo, mientras se establecían, acuerdos con el capital internacional interesado en la explotación minera conjuntamente con el Estado, a fin de reforzar el eslabonamiento económico y la balanza comercial.

4. Oficina Nacional de Estadística, *Cuentas Nacionales*.

Este conjunto de medidas estaba destinado a favorecer la sustancial mejora de la distribución social y geográfica del ingreso y, en general, del conjunto de los recursos sociales. Todo lo cual derivaría en un proceso de democratización social y cultural, permitiendo a la sociedad centrarse en su propia dinámica, dejando de girar como satélite alrededor de intereses foráneos. Finalmente, esta actividad estatal permitiría que el pueblo reconociera en el Estado la encarnación de sus esperanzas y el eje de su identificación colectiva, nacional.

Paralelamente al impulso de esas medidas, administrativas, la política internacional dio un vuelco insólito. La Cancillería peruana, que hasta entonces no perdía oportunidad para apoyar al gobierno norteamericano en cualquier foro internacional, propugnó el desarrollo del bloque gubernamental del Tercer Mundo y de los No-Alineados, a fin de buscar mancomunadamente el establecimiento de un "nuevo orden internacional" que eliminara el dominio de los países desarrollados.

En concordancia con la política planteada se establecieron relaciones con los países de Europa Oriental y China, meses antes del viaje de Nixon, y se rompió el bloqueo norteamericano impuesto a Cuba. Propició el fortalecimiento del Pacto Andino que, además del desarrollo de economías de escala y de integración económica al nivel de los países del

Acuerdo de, Cartagena, debería eliminar las tensiones político-militares entre estos países.

La nueva orientación internacional se proponía la creación de diversas alianzas políticas que pudieran contrarrestar el eventual bloqueo del gobierno de los Estados Unidos y empresas norteamericanas, y el acceso a recursos económicos y militares alternativos para desarrollar e impulsar los objetivos nacionales propuestos por el GRFA.

En suma, el proyecto militar se proponía, de manera general, combinar la acumulación capitalista del Estado y la del sector privado a fin de ampliar, profundizar y homogeneizar, el mercado interno, con la consiguiente integración económica y social. En la medida que se lograra dicha integración y se afirmara la democratización social y económica se debería ir forjando la unidad cultural, apoyada de manera especial por la reforma educativa y la estatización de los medios masivos de comunicación, que deberían propiciar el espontáneo apoyo popular al gobierno, consumándose la unión del "pueblo" con su fuerza armada. En este conjunto de operaciones, la política internacional propugnaba la constitución de un conjunto de alianzas políticas a nivel internacional que neutralizaran las posibilidades ofensivas de los "enemigos de la Revolución", dentro y fuera del país. En consecuencia, el proyecto militar estaba destinado a asegurar la integración nacional y po-



lítica de la sociedad peruana bajo el liderazgo militar. Así el GRFA perseguía culminar los esfuerzos realizados, desde 1930, por los sectores medios.

## II

Las medidas reformistas y nacionalistas que dictara el GRFA significaron un inmediato enfrentamiento, con las empresas extranjeras afectadas, en su mayoría norteamericanas, y con el gobierno de los Estados Unidos. Desde un primer momento, el Perú procuró averiguar las tensiones y eliminar las posibilidades de confrontación política, negociando el pago de las estatizaciones por intermedio de la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

El papel de mediación que tuvieron dichas ramas del ejecutivo norteamericana se orientó a frenar la posibilidad de "cubanización" de la Revolución Peruana o que constituyera alianzas con los gobiernos de Allende y Torres, en Chile y Bolivia, respectivamente, que podrían atentar contra la "seguridad nacional" norteamericana, supuesto eje de intereses de la política exterior de Estados Unidos.

De esta manera, y a diferencia de las relaciones cubano-norteamericanas; el gobierno de Estados Unidos buscó impedir que el nacionalismo de los militares se radicalizara, determinando soluciones de corte socialista, tal como el general Velasco insinuaba como forma de chantaje. De ahí que el gobierno de

los Estados Unidos negociara con las empresas norteamericanas para llegar a un acuerdo que diera por finalizado el conflicto suscrito en 1974, mediante el cual el gobierno norteamericano concedió un préstamo al gobierno peruano, para que este —a través del primero— cancelara el pago de las estatizaciones.

Mientras el GRFA decretaba las estatizaciones y negociaba con su contraparte norteamericana un arreglo "honorable" para ambas partes, el Perú sufrió hasta 1974 los efectos de un visible bloqueo de las fuentes de financiamiento del gobierno norteamericano. Sin embargo, desde 1972 y refinanciada la deuda que el gobierno peruano arrastraba, el Perú inició una vertiginosa espiral de endeudamiento con el euromercado<sup>5</sup> que, como dijera hace poco un alto funcionario, financió la Revolución Peruana.

Pero no sólo las negociaciones y la posterior suscripción del acuerdo peruano-norteamericano favoreció que el Perú pudiera alcanzar la confianza del capital financiero internacional. También jugó en ese sentido el hecho que los prestamistas evaluaran que el país entraba en un ciclo de prosperidad, y por

5. Barbara Stallings, "Peru and the US Banks: Privatization of Financial Relations", en Richard R. Fagen (ed.), *Capitalism and the State in U.S.-Latin American Relations*, Stanford University Press, 1979. Oscar Ugarteche, *La banca transnacional, la deuda estema y el Estado; Perú 1968-1978*, IEP, Lima, 1960.

lo tanto de capacidad para reembolsar los préstamos, debido, a los elevados precios del cobre y a la certeza de encontrarse importantes yacimientos de petróleo en la selva, cuyo valor se había, multiplicado gracias a la política de la OPEP.

A esto se sumaba, y de manera definitiva, el hecho que el GRFA daba reiteradas muestra de no pretender modificar el patrón de desarrollo capitalista dependiente, basado en la dinámica, ejercida por las empresas multinacionales y que se iniciara a fines de los años cincuenta. En efecto, el GRFA alteró relativamente la estructura de la propiedad en favor del Estado y de reducidos seguimientos de la población urbana y rural, incorporados en las comunidades laborales y en las cooperativas agrarias de mayor rentabilidad, respectivamente. De esta manera las reformas continuaban incorporando selectivamente, a segmentos sociales populares y muy en especial a las clases medias en las consideraciones estatales, razón para que algunos comentaristas calificaran estas medidas como una revolución *de y para* la clase media. Sin embargo, dichas reformas no alcanzaban a cubrir las necesidades vitales de las mayorías rurales y urbanas, no obstante las reiteradas declaraciones gubernamentales que afirmaban lo contrario.

Si bien la modificación de la estructura de la propiedad alteró el peso relativo de los agentes de apropiación del excedente económico, dejó relativamen-

te inalterado el uso de dicho excedente. Las principales reformas estructurales, la agraria y la industrial. Favorecieron la redistribución del ingreso en favor de las capas sociales de más alto ingreso relativo <sup>6</sup> y se consolidó la estructura y composición de la producción basada en la sustitución de importaciones, destinada al consumo de dichas clases sociales. El Estado amplió y diversificó de manera notable el aparato burocrático: se crearon cerca de 150 empresas públicas, y mientras en 1970 el número de trabajadores estatales, empresas públicas incluidas, alcanzaba, a cerca de 300.000 personas, en 1977 esta cifra subió a alrededor de 670,000. <sup>7</sup> El gasto público y sus niveles de inversión se incrementaron y adecuaron a la oferta de bienes y servicios producidos por las empresas capitalistas internacionales, dejándolas en libertad para que determinaran la estructura productiva y del empleo, la distribución del ingreso personal y regional, así como del consumo que favorece, sin lugar a dudas, a los sectores de más altos ingresos y castiga a las capas populares. <sup>8</sup>

6. Adolfo Figueroa y Richard Webb, *La distribución del ingreso en el Perú*, IEP, Lima, 1975.

7. Datos tomados de varias fuentes: Instituto Nacional de Administración Pública; Oficina Nacional de Estadísticas; y las Memorias Anuales de las Empresas Públicas.

8. Alberto Couriel, *Perú, estrategia de desarrollo y grados de satisfacción de las necesidades básicas*, PREALC, Santiago de Chile, setiembre, 1978.

De ahí precisamente, el alto grado de concentración de la producción industrial y su marcado carácter oligopólico, que se asociara con el hecho que la canasta de bienes industriales de consumo duradero se diversificara notablemente en el lustro 1970-1975, pese a las intenciones de racionalización contenidas en la ley de industrias.

Esta política significaba subsidiar a los sectores de más altos ingresos, localizados en Lima;<sup>10</sup> mantener inalterado el regresivo sistema tributario;<sup>11</sup> incrementar las exoneraciones a los capitalistas,<sup>12</sup> además de contar con subsidios provenientes de las empresas públicas; controlar los precios agrícolas y subsidiar la importación de alimentos,<sup>13</sup> con la consiguiente reducción de los ingresos rurales; establecer una política crediticia en detrimento de la agricultura y favorable a la industria, por cuanto se congelaron las tasas de interés y cambio, que llevó el precio real de la divisa a la mitad del valor que acusaba en

9. Jaime Gianella y Andrés Gonzales, *Análisis de la concentración en el sector industrial*, 1972, Lima, 1975, (ms.).

10. Carlos Amat y León Chávez, Héctor León Hinostroza, *Estructura y niveles de ingreso familiar en el Perú*, MEF, Lima, diciembre, 1977.

11. Oscar Ugarteche, *op. cit.*

12. Germán de la Melena, *La reforma financiera, octubre 1968-octubre 1973*, MEF, Lima, 1973, p. 178.

13. Elena Alvarez, *Política agraria y estancamiento de la agricultura 1969-1977*, IEP, Lima, 1980.

1968.<sup>14</sup> Esto permitió un vertiginoso crecimiento de las importaciones con una impresionante incidencia en la sobrefacturación.<sup>15</sup> Por último, significó también la ampliación de las facilidades comerciales y de servicios urbanos centrados en Lima, destinada a impulsar la dinámica del nuevo capital comercial.

De esta manera y al amparo de una ideología y actividad administrativa que pretendían, simultáneamente, alentar una política distributiva en favor de los sectores populares, el desarrollo de la burguesía nativa y del aparato productivo del Estado, se consolidaron las condiciones del proceso de acumulación concentrado en las actividades de las empresas multinacionales asociadas al Estado. Así, quedaba ratificada en los hechos la hipótesis de Mariátegui relativa al futuro que tendría el proyecto aprista de capitalismo nacional en el momento del desarrollo imperialista"

### III

Sin embargo, la política económica del gobierno se encontraba plagada de las contradicciones propias de los regímenes populistas. Las reformas estructu-

14. Roberto Abusada, *Reformas estructurales y crisis económica en el sector industrial peruano*, ponencia presentada en el seminario "The Peruvian Experiment Reconsidered" y publicado por el Latin American Program, The Wilson Center, Smithsonian Institution, N° 29.

15. Oscar Ugarteche, *op. cit.*

rales emprendidas por los militares tuvieron, como se dijo, un impacto relativamente distributivo en reducidos segmentos de las clases populares, sin lograr satisfacer los requerimientos democráticos y nacionales de la inmensa mayoría popular. Como se viera en las páginas anteriores, las limitaciones de las reformas se debían a que se inscribían en un marco general que favorecía la realización del capital de las empresas multinacionales y de la segundona burguesía peruana, mediante el apoyo y subsidio estatales.

Pero, por otro lado, las medidas reformistas y estatistas bloqueaban la continua, fluida y legítima realización del capital. La comunidad laboral, la estabilidad del empleo, el control de precios y de cambio, y el relativo apoyo gubernamental a algunas reivindicaciones sindicales, supuestamente propiciaban el "desquiciamiento del principio de autoridad" de las empresas y recortaban los amplios márgenes de utilidad que sus propietarios anticipaban. En segundo lugar, la penetración del Estado en las áreas productivas, restringiendo la actividad de la burguesía, la iniciativa gubernamental para desarrollar prioritariamente el área de "propiedad social", conjuntamente con el crecimiento y fortalecimiento del control y fiscalización estatales, con el consiguiente engorro e ineficiencia administrativa, se sumaron para crear un clima de gran inseguridad en la clase dominante. Por último, la estatización de los medios

de comunicación y su frecuente denuncia de las prácticas "abusivas" de las empresas, en su afán de subrayar el carácter "no-capitalista" de la revolución militar, y la implantación de la reforma de la educación, fueron percibidos por la clase económicamente dominante como medidas, para acabar con sus últimos baluartes políticos e ideológicos e iniciar el tránsito a un comunismo a la "yugoslava". Esto significó la emigración de capitales y capitalistas, invalidando las medidas estrictamente económicas que favorecían su desarrollo.

Esta tendencia se hizo patente en 1974 cuando el general Velasco —que había llegado a controlar personalmente el aparato castrense y desde éste al Estado— rechazó indignado la tímida petición que le hicieron técnicos del Instituto Nacional de Planificación para tomar medidas conducentes a paliar la inminente crisis fiscal.

En efecto, la sobrevaluación de la moneda, favorecía el crecimiento vertiginoso, de las importaciones y el consumo, cuando los precios internacionales tendían a aumentar, con la consiguiente sangría de divisas, en un momento que el volumen de las exportaciones se había estancado. En segundo lugar, el mantenimiento de subsidios gubernamentales a la importación de productos alimenticios y combustibles, que tendían al alza, pesaban cada vez más sobre la balanza del comercio exterior y desalentaba la producción agraria que seguía con precios controlados.



Las empresas públicas fueron obligadas a mantener el subsidio que otorgaban al capital privado, a la vez que debían seguir vendiendo por debajo de su costo de producción, motivando su desfinanciamiento y cargando ese peso en el presupuesto gubernamental. Por si todo esto fuera poco, a partir de fines de 1973 el GRFA inició una frenética carrera armamentista, ante las consideraciones militares relativas a una inminente situación bélica con Chile.

El déficit presupuestal iniciado en 1968, y el que se venía arrastrando, fueron cubiertos por el endeudamiento interno. Luego, a partir de 1972 el déficit y crecimiento de las importaciones fueron cubiertos, como se ha señalado antes, mediante el endeudamiento externo.

En 1974 los factores económicos y políticos señalados determinaron la paralización de la inversión privada, que el gobierno trató de remediar recurriendo al violento incremento de los préstamos del euromercado, que permitió el financiamiento del 45% del presupuesto de ese año. A esto se sumaron los compromisos que el gobierno adquirió con la banca internacional para la importación de armamentos.

El caos económico provocado por estas situaciones, favoreció el recrudecimiento de las movilizaciones populares y los frecuentes ataques de la burguesía. Frente a éstos, Velasco decidió expropiar los medios de comunicación, ante el "egoísmo" e "incom-

presión" de la burguesía a sus constantes llamados para sumarse a su proyecto político. Esta expropiación selló el divorcio entre, burguesía, y militares, pero también puso de manifiesto la escisión existente entre los mandos militares.<sup>16</sup> Así la crisis económica del populismo militar anticipaba la bancarrota del experimento "original" de la revolución militar.

#### IV

Algunos comentaristas han querido explicar la política económica del GRFA como una serie de desatinos debidos a la ignorancia de los militares y sus asesores, también por el carácter arbitrario del régimen político, incapaz de prestar oídos a las sugerencias y críticas que, los supuestamente, entendidos en la materia, hicieran a los encargados de la conducción económica.

Esta argumentación invoca razones "técnicas", ajenas a los intereses de las clases sociales, de sus representaciones y del Estado, considerados como factores políticos "exógenos" al quehacer económico. En cambio, si tomamos en cuenta los problemas y las preocupaciones políticas que se plantearon los dirigentes político-militares, es posible comprender la "racionalidad" del comportamiento aparentemente caótico de la política económica del gobierno militar.

16. Henry Pease, *El ocaso del poder oligárquico*, DESCO, Lima, 1977.

A riesgo de ser repetitivo, recordaremos que el GRFA perseguía resolver el problema de la seguridad nacional del país mediante la integración imperativa de la sociedad al Estado que, a su vez; debía responder a los designios del comando militar a fin de modernizar y de esta manera "potenciar" la capacidad externa del país. Es así como el carácter pequeño burgués y radicalmente reformista, combinado con la naturaleza castrense del GRFA, significó la eliminación de los elementos anacrónicos de la sociedad y que el Estado, en asociación con el capital multinacional y la débil burguesía nacional, impulsara la industrialización de sustitución de importaciones.

Este impulso se fundaba en la expectativa de masivos ingresos fiscales provenientes de las grandes y esperanzadas exportaciones petroleras y mineras que deberían cubrir con exceso, especialmente en una coyuntura internacional de alza de precios; el endeudamiento en que se comprometía el gobierno militar, Pero, en estas circunstancias varios factores vinieron a complicar su estrategia.

A partir del derrocamiento del gobierno de Unidad Popular en Chile y la instauración de la dictadura militar en 1973, el gobierno peruano inició una sistemática y considerable compra de armamentos: de un ritmo de incremento anual de 7.2% entre 1970-1974, precios de 1970, los gastos de defensa se elevaron en 22% anual entre 1974-1977. En el primer pe-

río do estos gastos representaron un promedio anual del 3.5% del PBI, mientras que entre 1975-1978 significaron el 5.6%.<sup>17</sup>

La percepción de uno de los coroneles implicados en la formación del gobierno militar, que en 1967 dijera que "Chile es como un tubo, cuando tiene, mucha presión interna, el corcho salta hacia arriba...", volvía a cobrar actualidad en los cuadros dirigentes de las fuerzas armadas. De ahí que el gobierno tomara la decisión, desechando cualquier consideración, de equipar velozmente y de manera considerable los aparatos militares como modo de disuadir la voluntad bélica chilena, puesto que para los estrategas peruanos resultaba inminente un conflicto que amenazaba, simultáneamente, las fronteras sur, norte e incluso la oriental. En efecto, a partir de entonces se produjeron diversos sucesos que amenazaron con crear un estado de guerra entre Chile y el Perú.

En esta contingencia el GRFA consideró necesario, además, mantener una suerte de equilibrio entre las diferentes clases sociales, a fin de asegurar la retaguardia militar, e impedir la repetición de la dramática experiencia de 1879. En tales circunstancias, las consideraciones políticas del gobierno quedaron subordinadas a las nuevas "hipótesis de gue-

17. Manuel Moreyra, Exposición del 25 de enero de 1979 en IPAE.

rra", mientras la Sociedad era mantenida ignorante y ajena de las evaluaciones y planteamientos militares.

Por eso, cuando los técnicos apremiaban al Ejecutivo para que decidiera Una serie de reajustes económicos a fin de hacer frente a la inminente crisis económica que se avecinaba, y que suponía austeridad y racionalización del gasto y del endeudamiento públicos, los generales y almirantes decidieron seguir obteniendo créditos para la compra de equipos y pertrechos militares; mientras que simultáneamente, se decidía ejecutar una política económica en el "frente interno", que supuestamente debería amortiguar el conflicto social, hasta tanto maduraran las obras que permitieran la expansión, de las exportaciones. Estas acciones económicas, a su vez, debían conjugarse con el desarrollo de organizaciones estatales encargadas de anular la creciente autonomía del movimiento popular y de acallar las protestas de la burguesía, haciendo posible el desarrollo del equilibrio social que perseguían los militares.

Pero, contrariamente a lo esperado, el GRFA acabó enredándose en las contrapuestas acciones que desataba, evocando una comedia de equivocaciones, que agudizaron el conflicto social. La contradicción entre palabras y hechos le impidió ganar adhesión ni apoyarse en ningún sector significativo de la sociedad. Al contrario dio pie para que se intensifi-

cara la oposición de las distintas fuerzas sociales y la fractura entre las varias tendencias que hasta entonces convivían con el Estado, que condujo finalmente a la deposición del general Velasco, hasta entonces considerado como el "jefe indiscutible e indiscutido de la Revolución" y el definitivo cambio de rumbo del gobierno con la "segunda fase de la Revolución Peruana", que un periodista oficial calificara como "la primavera de la revolución..."

Pero este fracaso no sólo fue militar. Dejó ver el reducido alcance real de los varios proyectos políticos que durante los últimos cincuenta años desarrollaron diferentes sectores radicales de la pequeña burguesía, en su afán de integrar sociedad y Estado, mediante fórmulas "solidarias, comunitarias, humanistas, cristianas, libertarias, socialistas, pluralistas, anti-imperialistas".

## ¿quis custodiem custodiet?

La búsqueda de un "hombre nuevo", solidario, forjado en una sociedad "ni capitalista ni comunista" y que se concretó en el desarrollo del patrón de acumulación que organiza —según la feliz caracterización de O'Donnell— ese *ménage à trois* que forman el Estado, el capital multinacional y la burguesía nacional, estaba condicionado a la capacidad gubernamental para enclaustrar a las clases sociales en el aparato estatal. De manera que, según la concepción de Haya de la Torre, el Estado pudiera lograr la hegemonía sobre la sociedad, a través de la acción desplegada por la pequeña burguesía, técnica y militar.

Las medidas reformistas que el GRFA desarrolló, independientemente de las organizaciones, intereses y perspectivas de las clases sociales provoca-

ron, contrariamente a lo esperado por militares, técnicos e ideólogos, una generalizada y diferenciada oposición. El gobierno trató de eludirla, favoreciendo y golpeando una vez a unos, otra vez a otros, malquistándose con todos, concluyendo en los profundos desajustes económicos que destacan los análisis económicos.

A su vez, la independencia que el gobierno insistiera en mantener respecto a la sociedad, las movilizaciones que los diferentes sectores sociales desarrollaron en contra de sus medidas y las respuestas económicas y políticas estatales, reforzaron el distanciamiento entre sociedad y militares. Este hecho le restó al gobierno autoridad y legitimidad para involucrar a las clases sociales en fórmulas corporativas que desvanecieran sus particulares intereses y elevaran a la categoría de valores nacionales las "Bases Ideológicas de la Revolución Peruana".

Es así como la impopularidad e ineficacia política del gobierno se fundaron en su carácter pequeño burgués, que lo inclinaba a definir la condición "bonapartista" del mismo, en tanto procuraba mantenerse por encima y equidistante de las clases sociales —*par dessus la mêlée*—, asumiendo su representación colectiva, mientras que realmente no lograba sino representarse así mismo. Pero la condición bonapartista del GRFA también respondía a la naturaleza institucional castrense del gobierno. En efecto, por la estructura jerárquica y autoritaria —que



reproduce fielmente la división clasista y étnica de la sociedad peruana— la institución militar no tolera un orden en el que los subordinados, o las clases populares, que para el caso es lo mismo, no acaten las órdenes superiores "sin dudas ni murmuraciones". De ahí que un general pudiera afirmarnos que el principal defecto de la Revolución fue su miedo al pueblo.

## I

Tal como se ha dicho, la instalación del GRFA significó una relativa autonomía de acción del Estado respecto a los diferentes sectores de la sociedad, expresada en la adopción de una serie de medidas autoritarias de carácter tecnocrático. El Ejecutivo y el "Cuerpo de Oficiales Asesores de la Presidencia" se constituyó en la fuente de sus iniciativas legislativas, rechazando la representación orgánica de los intereses de las distintas clases sociales en la actividad estatal. Al contrario, estaban destinadas a marchar "a paso ligero" en la dirección señalada. Es así como el estamento superior de las Fuerzas Armadas se erigió en conductor responsable del gobierno, sin permitir que su acción fuera fiscalizada socialmente, a fin de asegurar el cumplimiento de sus propósitos respecto a la sociedad y Estado peruano.

Para esto, el gobierno adoptó los principios de organización, jerarquización y división de las Fuer-

zas Armadas, adjudicando los cargos de responsabilidad a oficiales de las distintas armas, que contaban con sus respectivos "asesores" y que debían dar cuenta sólo a sus jefes, siguiendo estrictamente la línea de mando. Los servicios de inteligencia sumaron a sus funciones la de controlar que los planes de desarrollo se mantuvieran como "secretos de Estado", detectar a los enemigos "infiltrados" en el gobierno que pretendieran sabotear su acción, y acallar las críticas de la sociedad. De esta manera, se reforzaba la tradicional estructura política que rechazaba como un estigma la opinión "pública" y el conflicto social.

Estas situaciones contribuyeron a definir uno de los rasgos decisivos del gobierno: su distanciamiento de la sociedad. Es decir que no buscara ni lograra un claro y orgánico sustento social, no obstante que pretendía armonizar los contrapuestos intereses sociales. Sin embargo, este distanciamiento era relativo, puesto que el personal del gobierno, militares y asesores, por su condición de intermediarios políticos —aunque rechazaran reconocer esa función— concentraban los principales intereses de las contrapuestas clases sociales. Es decir, estas clases penetraban diferencialmente al gobierno, sentándose las bases de una tensión permanente que, so pretexto del secreto, procuraban mantener la ficción de la unidad monolítica del gobierno, amparándose en el arbitraje del Jefe del Estado.

## II

La emergencia del gobierno militar produjo, el silenciamiento de los partidos APRA y Acción Popular a los que se culpaba, conjuntamente con la "oligarquía" y el "imperialismo", de ser los causantes del subdesarrollo y la "dependencia" del país respecto al exterior. El gobierno esperaba que la transferencia de la propiedad, con la consiguiente transferencia del, poder político" le provocaría un espontáneo e indiferenciado apoyo popular, que aniquilaría por inanición a dichas organizaciones.

Frente a los reiterados e intermitentes ataques del gobierno a los dirigentes apristas, Haya de la Torre nos dijo que en tales casos "hay que hacer lo que recomiendan los ingleses: *wait and see*", evitar la confrontación y esperar el desarrollo de los acontecimientos que obligara a los militares a reconocer su existencia política. Al mismo tiempo que, en las raras ocasiones que hacía declaraciones públicas, como el día de su cumpleaños, "Día de la Fraternidad" de los apristas, Haya sugiriera su apoyo a las reformas económicas, subrayando que éstas habían sido propuestas por él desde 1930, pasando a solicitar el diálogo del gobierno con la "civilidad", es decir con él mismo.

Por otro lado, Acción Popular fue afectado por la deportación de su jefe, el ex presidente Belaúnde, así como por el exilio de un pequeño grupo de

Sus dirigentes, a lo que se sumó la sistemática campaña de desprestigio que el gobierno militar desarrolló contra la actuación de este partido y del gobierno que dirigió. Esto significó su desaparición de la escena pública.

La burguesía nacional también se encontró incapacitada para hacer valer políticamente sus intereses concretos e inmediatos, tal como los percibía. La ideología gubernamental respecto al papel negativo que esta clase había tenido en el desarrollo del país y las nuevas funciones que debía cumplir en el futuro se expresaron en una profusa legislación, en cuya elaboración esta clase no tuvo ingerencia. Legislación que limitaba, controlaba y otorgaba al Estado el poder de orientar la producción y las relaciones obrero-patronales.

Como las reformas anularon, fácilmente, el supuesto poderlo de la "oligarquía" y las críticas que hicieran los otros sectores propietarios al gobierno fueron duramente replicadas, la burguesía buscó la manera de infiltrarse en el Estado mientras se relacionaba individualmente con funcionarios, civiles y militares, a fin de adaptarse a las nuevas situaciones y recabar los particulares privilegios que les permitieran aprovechar las posibilidades del patrón de acumulación industrial. Si bien la incapacidad política de la burguesía reforzó su gusto por las favores personales, los contactos establecidos permitieron la asociación entre el capital estatal y el priva-

do, así como la incorporación de militares y técnicos en los intereses de las empresas, favoreciendo el desarrollo de incontenibles comentarios sobre una generalizada corrupción en la administración pública.

Es decir que el GRFA arrancó las banderas y desmanteló las organizaciones políticas tradicionales, que respondían a la dirección y proyección pequeño burguesa, sin acudir a la represión. Igualmente logró inmovilizar los organismos gremiales de la burguesía, y al estatizar los medios de comunicación inutilizó su último recurso de presión política. De esta manera el gobierno fue capaz de crear un vacío político en este flanco, poniendo en evidencia, una vez más, la precariedad política de la clase dominante, rasgo fundamental de la organización social peruana.

Si el GRFA doblegó a la burguesía y los partidos políticos, no fue capaz de obtener iguales resultados con las clases populares y las nuevas fuerzas políticas de la izquierda revolucionaria. El gobierno, como se dijo antes, otorgó una serie de concesiones a los sectores populares, que para uno de los adictos del general Velasco "constituyen regalos que la Revolución hace al pueblo peruano".

El Partido Comunista respaldó al gobierno en tanto éste se encontraba realizando una revolución antifeudal, antiimperialista y nacionalista, y por ende entraba en la categoría de los movimientos de

liberación nacional.<sup>18</sup> Este sostenido e ininterrumpido apoyo del PC al gobierno militar, por lo menos hasta 1975, dio lugar a un inestable *quid pro quo* entre ambos, no ajeno a las relaciones diplomáticas que el gobierno estableció con Cuba y la URSS.

Mientras el gobierno atacaba al APRA, bloqueaba los canales reivindicativos de la CTP —hasta dejarla en un estado de marasmo—, consentía el desarrollo del PC, la acción que desplegaba entre los sectores obreros, y la CGTP pasó a reemplazar el papel hasta entonces desempeñado por la CTP.

Sin embargo, esta relación entre PC y gobierno no fue suficiente para que el Estado lograra ganarse a la población popular. Si en general la política asistencial, distributiva, resultaba contradictoria con el patrón de acumulación capitalista, en las condiciones del desarrollo del Perú quedó en evidencia lo reducido del espacio que media entre ambos. De ahí que, como apuntamos antes, cuando el gobierno jugó ambas cartas se vio de inmediato flanqueado por intensas movilizaciones populares.

Además, a lo largo de las últimas dos décadas había madurado en las clases populares una tendencia hacia su independencia política. Por último, desde la revolución cubana se habían creado grupos

18. K. N. Brutents, *National Liberation Revolutions Today*, Progress Publishers, Moscow, 1977.

que se enrolaban en una "nueva izquierda" desligada del PC, y el conflicto chino-soviético, a su vez, repercutió para reforzar ese desarrollo e invalidar la tradicional hegemonía del PC en el seno de la izquierda.

El apoyo que este partido dio a la revolución militar determinó que atacara . las movilizaciones populares que escapaban a su control —como en el caso de mineros y maestros— dando lugar a que importantes agrupaciones de trabajadores se separaran de la CGTP y que en sus pases se iniciara un severo antagonismo contra la dirección. En esa misma medida, las embrionarias fuerzas dispersas de la izquierda revolucionaria lograron un significativo arraigo popular, al participar activamente y encabezar las intensas movilizaciones campesinas, urbanas y regionales que se propagaron por todo el país desde 1971, elevando a sus dirigentes a la condición de figuras nacionales.

Tanto el gobierno como el PC se alinearon para denunciar a la izquierda revolucionaria, calificándola de "ultras", "agentes del imperialismo", "desestabilizadores", "anti-revolucionarios". Sin embargo, esto fue insuficiente para descalificar la asociación entre la izquierda y los ampliados sectores populares que ganaban la capacidad de movilizarse en contra del gobierno y se desligaban de la ideología y organizaciones populistas.

El desarrollo de la lucha de clases y la creciente oposición al Estado de los sectores dominados rurales y urbanos constituyeron un importante desafío a la imaginación ideológica de los gobernantes. Estos creían que importantes sectores de las clases sociales no tardarían en reconocer las bondades de las prescripciones gubernamentales, haciendo posible que desplazaran sus identificaciones y lealtades a los dirigentes del "proceso".

Como se ha visto, nada de esto ocurrió. Frente a esto, los ideólogos del régimen se propusieron la creación gradual de una "democracia social de participación plena", que englobara corporativamente a las clases de la sociedad en un marco "solidario" en el que los militares representarían los intereses de cada uno de ellos. Este régimen político debería resultar, primero, de la modificación de la estructura de la propiedad que, según uno de los ideólogos del régimen, eliminaba la estructura de clases. Así, por primera vez en la historia peruana, se establecería un consenso entre gobernados y gobernantes, que se manifestaría en el encarrilamiento de la población bajo las órdenes del Jefe de la Revolución, sin pretender influir en la marcha de la misma.

Sin embargo, pronto se hizo evidente que la "transferencia de la propiedad" era insuficiente para lograr la integración política, de manera subordinada, de la población al gobierno militar. De ahí



que se hiciera necesaria, pese a la resistencia de importantes sectores militares, la creación de mecanismos institucionales que "apoyaran" la movilización "social", en el supuesto que ésta era una sociedad abúlica, y normaran la "participación popular". Pero muy pronto se observó que cuando los militares y sus técnicos pensaban en "participación" tenían en mente un desfile militar. . .

Conjuntamente con las reformas institucionales proclamadas por el gobierno militar, sus propagandistas iniciaron un inflamado discurso ideológico que atacaba, simultáneamente, las bases ideológicas oligárquicas, las de los partidos APRA y AP y las de la izquierda revolucionaria. Este discurso insistía en la "originalidad del proceso" revolucionario, en su carácter "humanista, cristiano, gradualista, socialista, libertario", etc., destinado a lograr la "segunda independencia".

Sería en estas condiciones que los sectores populares organizados, que se desligaban de la mediación de los partidos populistas, y que se encontraban con los núcleos de la izquierda, intensificaron su participación política insistiendo en sus reivindicaciones, interviniendo en la administración de las cooperativas y de las empresas industriales "reformadas", así como en la constitución autónoma de una organización nacional, destinada a coordinar y radicalizar las funciones de la "comunidad indus-

trial". Por otra parte, las masas campesinas intervenían de manera creciente en la toma de tierras a fin de realizar su reforma agraria. Es así como los sectores populares —*gracias y a pesar del gobierno militar*— avanzaron en su autonomía y capacidad de organización pese al intervencionismo estatal.

Rápidamente el gobierno se vio en la necesidad de enfrentar la presión popular, estableciendo un conjunto de organizaciones que pudieran encapsularla militarmente, y articularla subordinadamente al gobierno a través de la jerarquía militar. Así se crearon el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), la Confederación de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP) y otros organismos sindicales, surgidos al amparo del Ministerio del Interior y de otras dependencias oficiales, destinadas a dividir y controlar la movilización popular.

SINAMOS, que se iniciara como uno de los organismos estatales de mayor respaldo público, pronto entró en contradicción con el desarrollo político de la sociedad y con las tendencias más autoritarias del cuerpo militar, que lo condujo a su paralización y posterior "desactivación". Desde sus comienzos SINAMOS debió cumplir un papel francamente contradictorio: de un lado, debía organizar a la población para acelerar las reformas propuestas por el gobierno, concentrando la hostilidad de las clases dominantes, de los organismos públicos

que procuraban, tecnocráticamente, desarrollar sus objetivos y, en especial, de los servicios de inteligencia que nunca dejaron de sospechar que quienes dirigían esta organización pretendían rebasar el control militar. De otro lado, en la medida que SINAMOS procuraba desplazar a las organizaciones populares, concentraba la oposición de las clases dominadas. Así, SINAMOS se enfrentaba a los fuegos cruzados de las clases básicas de la sociedad y dejaba al descubierto la ambivalencia del gobierno militar.

El rápido fracaso de SINAMOS evidenció la urgencia de resolver el problema de la "participación" popular, en lo que respecta a la integración política de la sociedad al Estado. Esto motivó que, en 1974, cuando la crisis económica y política fue evidente, resurgiera la proposición de constituir, desde el gobierno, un partido de la revolución peruana. Un sector que apoyaba su creación, proponía el establecimiento de este organismo con vistas a constituir un frente popular que presionara al gobierno y lo radicalizara hasta lograr modificar el carácter pequeño burgués y militar del proceso en marcha. Frente a este sector se erigía otro que, a través del partido, se proponía una cabal regimentación de la población dentro del gobierno y la definitiva destrucción de las organizaciones populares autónomas.

El sector del gobierno que se oponía a ambas tendencias, y sostenía la tesis del "no partido", argumentaba que este tipo de organización "tradicional" por naturaleza era antidemocrática, por cuanto siempre acababa ciñéndose a la "ley de hierro de la oligarquía". Estos ideólogos que, sin saberlo, repetían viejas tesis europeas, se valían de estas proposiciones para insistir en el desarrollo, "espontáneo" de las organizaciones "de base" que, "apoyadas" por SINAMOS, se encargarían de resolver los problemas inmediatos de la población popular en el recinto laboral y comunal. Y, a partir de ellas, debía levantarse el movimiento político que respaldara el proceso de cambios establecido por los militares.

Pero estas veleidades intelectuales escondían el problema central. Como un propagandista, del gobierno lo diría con toda claridad, la creación de un partido significaba desestimar la existencia del que realizaba la revolución peruana; la fuerza armada. En efecto, la oposición a la formación del partido oficial era consecuente con el carácter militar del gobierno. La presencia de un partido de masas en el escenario político era diametralmente opuesta a la orientación militar de conducir, de manera exclusiva, el "proceso revolucionario", siguiendo la voluntad autoritaria de la pequeña burguesía uniformada y técnica. Organizar el apoyo popular significaba correr el riesgo que éste influyera en las

decisiones gubernamentales; reabriéndose el sistema político a las diferentes representaciones sociales, ferozmente rechazado por los ideólogos gubernamentales.

El abierto enfrentamiento entre clases populares y Estado, en el período que se abre en 1973, llevó a que el general Velasco respondiera "hasta acá nomás". Luego del fracaso de SINAMOS y de otros organismos estatales que buscaban penetrar y dividir el movimiento popular, se creó el "Movimiento Laboral Revolucionario" (MLR), previsto en los primeros años del GRFA. La represión política sobre las capas populares, que significó el MLR, concitó de inmediato la articulación y tenaz oposición de los trabajadores y organizaciones políticas de la izquierda revolucionaria.

La exitosa resistencia que culminaba la serie de fracasos del gobierno llevó a su desplome político, el de la fuerza armada y del general Velasco. De ahí que éste fuera depuesto del cargo por los mandos militares y que sólo una docena de personas estuvieran presentes para ver partir a su residencia particular, el que hasta el día anterior fuera considerado por la prensa oficial como "el Jefe indiscutible e indiscutido de la Revolución Peruana",

### III

Así, la primera fase de la Revolución Peruana" (1968-75) significó la eliminación de la estructura

oligárquico-imperialista y la implantación de medidas populistas-nacionalistas destinadas a incorporar, subordinadamente, a la población popular en el Estado y afirmar el nuevo patrón de acumulación fundado en la alianza del capital estatal y de la burguesía nacional con el capital multinacional. De esta manera parecían realizarse las aspiraciones desarrolladas durante las últimas cuatro décadas.

La "segunda fase", resultado de la crisis política que desató el gobierno de Velasco, significó la pautada erradicación de las características populistas-nacionalistas de la "primera fase", como modo de suprimir las contradicciones que bloqueaban el nuevo pacto social entre el Estado y el capital, intensificando el aislamiento del gobierno militar. Las clases populares, en especial el proletariado y los sectores medios asalariados, arremetieron contra el gobierno frente a sus medidas antipopulares. Pero, de otro lado, la burguesía y el capital multinacional siguieron oponiéndose al gobierno por su falta de voluntad para descartar radicalmente la herencia populista, en suma por no integrar orgánicamente sus intereses en los del gobierno.

Esta situación determinó que el gobierno se viera obligado a definir una estrategia de retirada política, a fin de no comprometer la integridad y autoridad militar en el aparato del Estado, que pudiera invalidar su presencia futura en la escena política. El gobierno convocó a elecciones para insta-

lar la Asamblea Constituyente que debería sentar las bases de la "institucionalización" de la lucha de clases y legitimar la represión sobre las clases dominadas.

Así, se reabrió la participación política de los "tradicionales" partidos políticos reformistas y, por primera vez en la historia peruana, se presenció la emergencia de varias organizaciones de la izquierda revolucionaria en la escena pública. Es en este panorama, que finalizada la actuación de la Asamblea Constituyente, el gobierno se viera obligado a convocar, a elecciones generales para 1980.

## balance y perspectivas

Hemos visto que la relativa democratización que el GRFA formuló para integrar nacional y políticamente a la sociedad alrededor del Estado resultó en un definitivo fracaso, dejando pendientes estos seculares problemas. En breve, este fracaso se explica porque el gobierno militar pretendió conciliar los intereses sociales en pugna y crear una sociedad solidaria, mediante la imposición de una política distributiva en el marco de un patrón de desarrollo basado en la concentración de ingresos y capital. Así, mientras este patrón de desarrollo anulaba las medidas distributivas, éstas a su vez, impedían el fluido desarrollo del capital. A esto se sumó que el diseño económico se encontraba condicionado por definiciones castrenses relativas a la seguridad nacional que venían a complicar el cuadro.



Este conjunto de situaciones produjo exactamente lo contrario a lo que el gobierno militar se había propuesto, provocando un nuevo nivel de contradicciones sociales que se manifestaron en la intensificación de la lucha de clases y la generalizada oposición de la sociedad al GRFA. En estas condiciones —que suponen crecientes márgenes de desarrollo de la organización y de una política autónoma de campesinos, obreros y de los sectores medios asalariados— el gobierno se vio incapacitado para encapsularlos corporativamente, más aún cuando por su misma naturaleza castrense estaba inhabilitado para promover su participación política organizada y asimilarla a los intereses del Estado.

Este complejo juego de relaciones sociales atravesó la política económica condicionando que el Perú bordeara la situación de bancarrota económica y se agudizaran las contradicciones sociales.

Es en esta coyuntura que el gobierno militar decidió convocar a elecciones para la Asamblea Constituyente para crearse una base de sustento político, en tanto que esta medida iba asociada con la promesa de "transferir" el poder en 1980, mientras que delegaba en técnicos la rigurosa y represiva conducción de una política económica de estabilización.

Es decir, los cuadros militares anticiparon, correctamente, que los partidos tradicionales se encar-

garían de buscar la canalización y aplacamiento de las exigencias populares, institucionalizando la participación política popular dentro de los marcos legales adecuados al patrón de acumulación capitalista.

Esta necesidad del gobierno militar y de las nuevas fuerzas dominantes de enclaustrar la participación popular se manifestó como urgente, puesto que en las elecciones a la Asamblea Constituyente alrededor de la tercera parte de la población centrada en Lima y en el sur peruano, votó por alguna de las organizaciones políticas de izquierda.

Sin embargo, la posibilidad de lograr la esperada institucionalización de la participación popular y su, absorción, en el nuevo régimen político parece improbable, por la generalizada fragmentación política y por la muy restringida capacidad del gobierno para legitimarse, en vista de su incapacidad para satisfacer las mínimas exigencias de la sociedad. En cuanto, a lo primero, el gobierno y los voceros de los distintos partidos de derecha vienen buscando "pactos" que aseguren la futura estabilidad política, en tanto que crecen las exigencias populares por la unificación de las fuerzas de izquierda. Pero, a su vez, esta posibilidad se encuentra obstaculizada, en primer lugar, por la carencia de una integración orgánica de los distintos intereses dominantes y agrupaciones políticas, que lleva a que nin-

guna de ellas pueda constituirse en su cabal representante política. En segundo lugar, porque cada uno de los partidos tiene intereses propios que defender y clientelas políticas que proteger. En suma, estas condiciones reflejan la precaria naturaleza política de la clase dominante en el Perú.

En cuanto a la capacidad de distribución y legitimación del gobierno, se encuentra muy restringida, debido a la integración de la sociedad al nuevo patrón de acumulación capitalista a escala mundial, al relativo fortalecimiento de la burguesía, a los requerimientos financieros internacionales, y por la crisis económica mundial. Esta restricción condiciona la insuficiente capacidad política del Estado para absorber e institucionalizar la generalizada movilización popular, debido a la violenta reducción de sus ingresos y oportunidades sociales, mientras el mercado alienta el desarrollo de muy altos niveles de consumo.

Si bien el fracaso del proyecto militar ha servido para hacer evidente las profundas limitaciones de un régimen populista-nacionalista, incluso de naturaleza radical, todavía en amplios sectores de la sociedad se atribuye el fracaso de ese régimen a la naturaleza: *militar* del gobierno. De ahí que los partidos reformistas traten de aprovecharse de este juicio para proponer la constitución de diferentes variantes populistas, como medio de aglutinar políticamente a la población.

Así, en la eventualidad de concretarse en 1980 la "transferencia del poder" , el nuevo gobierno se encontrará sujeto, de un lado, a multitudinarias exigencias organizadas de campesinos, obreros, sectores medios asalariados y de la mitad de la población activa en estado de subempleo y, de otro lado, a las presiones del capital para consolidar su predominio, ahora que los sectores oligárquicos de la burguesía han sido eliminados.

Sin embargo, es necesario matizar esta última proposición. Es probable que un próximo gobierno logre hacerse del apoyo de sectores medios y populares, gracias a una muy limitada política de corte asistencial. Pero, como se ha venido diciendo, la generalización de la participación popular significa que dicha política asistencial no permitirá satisfacer sino de modo muy restringido a limitados segmentos de la sociedad, repitiéndose la historia. El intento de sobrepasar estos límites —creando un millón de empleos, por ejemplo— asegura una inflación descomunal.

La idea de un proyecto "social-demócrata", imitando el modelo sueco o israelí, no deja de ser una licencia literaria de mal gusto. Está fuera de toda posibilidad imponer al capital internacional y a la burguesía peruana una carga tributaria semejante a la que existe en esas sociedades, de modo de multiplicar el gasto público y la inversión estatal, sin promover la inflación.

De esta manera, el logro de la democratización de la sociedad y de la política, elementos esenciales de la integración nacional, que las clases subordinadas y las formaciones de izquierda expresan en sus luchas cotidianas, se enfrentan al nuevo patrón de acumulación capitalista, que el Estado patrocina, y que los excluye de la actividad estatal.

Todo esto hace muy probable que cualquier gobierno "civil" deba sustentarse necesariamente en la fuerza armada, constituyendo un gobierno "mixto", en el que las organizaciones partidarias deban competir con las castrenses por el uso y destino de los recursos estatales.

Así, la década del ochenta se avizora como la culminación de un largo y lento proceso en el que se experimentó el desarrollo capitalista-dependiente y del Estado, incapaz de crear bases legítimas para encauzar la creciente movilización popular, cada vez más autónoma de las directivas ajenas a sus propios intereses. De esta manera, el Perú presenta también las contradicciones que se observan en otros países de la periferia del capitalismo monopolístico: entre las reivindicaciones democráticas y nacionales que enarbolan las organizaciones populares y el proceso de acumulación privado que a nivel internacional dirigen las empresas multinacionales; entre la creciente autonomía de las organizaciones populares y la debilitada capacidad de los partidos tradicionales y el Estado para legitimar el ordena-

miento dominante e institucionalizar la participación popular.<sup>19</sup>

¿Hasta qué punto en los años venideros el gobierno y los partidos reformistas serán capaces de reprimir y mediar estos conflictos, dirigiendo a la sociedad hacia una nueva institucionalidad? En su defecto, ¿la militarización del Estado será el único recurso del sistema de dominación para aplastar las organizaciones y reivindicaciones populares, que con sus esfuerzos por democratizar la sociedad resquebrajan los fundamentos institucionales? ¿En qué medida las clases populares, en su enfrentamiento con los intereses dominantes, lograrán independizarse políticamente, actualizando la proposición de Mariátegui respecto a que sólo el socialismo podrá resolver las exigencias democráticas y nacionales del pueblo peruano? Todas éstas son cuestiones abiertas que pronto deberán tener una respuesta.

19. Samuel Huntington y Joan M. Nelson, "No Easy Choice" Political Participation in Developing Countries, Harvard University Press, 1976.

## post-scriptum

A partir de 1978 el gobierno militar se vio ante la imperiosa necesidad de "sanear" la economía y organizar una ordenada retirada. La manifiesta hostilidad de la sociedad al gobierno y a la institución castrense crearon cada vez mayores discordancias en la jerarquía militar en relación a cómo resolver esta situación, que comprometía su capacidad de mantener su posición en la conducción política del país. El momento parecía ser propicio para emprender el reordenamiento político-económico del Estado, en tanto que los militares habían logrado asegurar su capacidad bélica y acallar momentáneamente la protesta popular.

En 1975, cuando era evidente la bancarrota económica y el Perú fue considerado incapaz de asumir compromisos con la banca internacional, el Fondo

Monetario exigió la aplicación de una rígida política de estabilización, "a la chilena", como paso previo a la renegociación de la deuda externa. Esta exigencia significaba, entre otras cosas, la drástica reducción de las compras de armamentos que el Perú mantenía desde fines de 1973, tajantemente rechazada por los comandos militares.

Sin embargo, en dicho año, desde la instauración del gobierno presidido por Morales Bermúdez se inició la aplicación de una serie de "correctivos económicos", en contra de los intereses populares e insuficientes para garantizar los intereses del capital. Pero la aplicación de una política de "shock", como exigía el FMI, era inaceptable para el gobierno, puesto que significaba la ruptura de la precaria "paz social", en momentos que éste se encontraba más aislado que nunca. Como lo expresaran públicamente los técnicos del Banco Central de Reserva, dicha política tenía "un alto costo social y político", que los militares no estaban en capacidad de pagar.

En 1978 los militares completaron el programa de importación de armamentos destinado a lograr el "equilibrio de poder" con Chile. La renovación de los litigios fronterizos entre el gobierno de este país y el de Argentina favoreció el restablecimiento de alianzas entre los militares peruanos y la dictadura rioplatense, otorgando al comando militar la certeza de haber roto el anterior aislamiento geopolítico



De otro lado, el gobierno militar quebró importantes huelgas desarrolladas en 1977-78, desarticulando a las organizaciones sindicales mediante la expulsión de miles de trabajadores de sus centros de trabajo y reduciendo a prisión a dirigentes políticos de la izquierda revolucionaria. Es obvio que esta situación podía revertir en un reagrupamiento del movimiento popular y del conjunto de las fuerzas políticas que lo apoyaban, con el consiguiente enfrentamiento de la sociedad contra el régimen que los militares dirigían.

A fin de evitar esta confrontación y en tanto que las relaciones con Chile habían dejado de tener las críticas características de años atrás, el gobierno se abocó a la solución de los problemas que mantenía con el capital, en la esperanza de lograr la recuperación de la derrumbada economía. En estas circunstancias surgió en el gobierno la alternativa de establecer una "tercera fase". Sin embargo, el desprestigio y aislamiento social de la fuerza armada anuló las posibilidades reales de esta tendencia, abriendo paso a la que favorecía el desarrollo de un proceso de *institucionalización* de la vida política, que permitiera articular y canalizar los intereses dominantes en el aparato estatal y mediar las exigencias populares, deteniendo la creciente autonomía política de estas clases.

El gobierno entabló conversaciones con los dirigentes de los partidos "tradicionales" a fin de esta-

blecer la modalidad y cronograma de la "transferencia del poder a la civilidad", mientras que delegaba la conducción de la política económica a un equipo de técnicos civiles, que aplicaron el conocido recetario de la política estabilizadora del FMI. De esta manera el gobierno consiguió una base social de apoyo para el relevo político y el reajuste económico.

Así, mientras se reestructuraba la política económica claramente en favor del capital, se propició el desplazamiento de la lucha política hacia la competencia electoral y luego a los debates en la Asamblea Constituyente. Este desplazamiento del campo político aisló las luchas populares y permitió su "legítima" represión con el tácito consentimiento de dichos partidos. Estos pretendieron justificar su acción recurriendo al argumento que dichas luchas dificultaban la "transferencia" del poder y que, si bien la nueva política económica castigaba duramente a las clases populares, no había otra alternativa para lograr la recuperación de la salud económica del país y asegurar la futura estabilidad política del régimen que se iniciaría en 1980. De esta suerte en la Asamblea Constituyente se acalló la discusión sobre la situación política inmediata.

Debido a un conjunto de factores, entre ellos al mejoramiento de los precios de los productos de exportación, el gobierno logró una rápida recuperación de sus reservas internacionales y de su posición frente a la banca extranjera, a costa de una brutal re-

ducción de los niveles de empleo, ingreso y salud populares.

Promulgada la Constitución en 1979, el GRFA convocó para mayo de 1980 a Elecciones Generales. La recuperación financiera, las conmemoraciones por el centenario de la guerra con Chile y esta convocatoria electoral, estaban destinadas a resarcir a la fuerza armada de su desprestigio y aislamiento.

La campaña electoral monopolizó la vida política del país, pasando a un segundo plano la movilización popular y difiriéndose sus reclamos para cuando se constituyera el nuevo régimen político.

Muerto Haya de la Torre, el APRA convocó a un congreso para designar al candidato presidencial que debería beneficiarse del aura que rodeó al jefe del partido. Antes de iniciarse salieron a relucir las diferentes tendencias existentes en el partido y que Haya había sabido equilibrar. Con su desaparición la situación fue diferente y la designación de Armando Villanueva se presentó como un triunfo basado en los métodos coercitivos de sus allegados, los disciplinarios, los mentados "búfalos".

A esto se sumó la imagen que el APRA procuró transmitir a la ciudadanía, en la multimillonaria campaña que desarrolló con el apoyo de la social democracia alemana, es decir la de una sólida y disciplinada organización, capaz de controlar el país, traducida en el slogan "Armando tiene la fuerza".

En resumen, el APRA, sin Haya de la Torre, se presentó y así lo percibieron los no-apristas, como una organización cerrada que en el poder serviría a su clientela y a los intereses partidarios, siguiendo prácticas coercitivas. Para los sectores populares de orientación revolucionaria, la "fuerza" de Armando Villanueva estaba orientada a la destrucción de las organizaciones que el partido no controlaba y a aplacar, como durante la década de 1960, las exigencias populares, favoreciendo el desarrollo de los intereses de la burguesía.

Luis Bedoya Reyes, candidato del Partido Popular Cristiano, propulsor del capitalismo "a la Pinochet", se presentó como el eficiente y enérgico "gerente" que el país requería para poner remedio al descalabro en que se encontraba el país. A pesar de la moderna y costosa campaña publicitaria realizada por el PPC no se libró de la imagen de representante preclaro de los intereses más cavernarios de la burguesía.

El gran capital apostó —y en grande— a estos candidatos. Un presidente aprista debía asegurar, con su organización, el férreo control del movimiento popular, mientras que la dirección "técnica" del bedoyismo se encargaría de la estricta aplicación de la "economía social del mercado". Así, el control del APRA sobre la sociedad y la dirección de la economía, en manos de la representación política de la burguesía, debían crear una duradera estabilidad ins-

titucional burguesa. Es obvio que en estas previsiones no se contemplaban las evidentes contradicciones que suponían un pacto de esta naturaleza.

Si bien la burguesía es francamente dominante en la nueva configuración económica, sus planes políticos sufrieron un duro revés. Al lado de los partidos mencionados, entró a competir Acción Popular, conducido por su jefe, el ex presidente Belaúnde, depuesto por los militares en 1968. Este, a diferencia de los anteriores candidatos, no se preocupó en ofrecer una imagen de fuerza, ni de contar con una organización sólida y disciplinada, tampoco de buscar la exclusiva representación de los intereses de los propietarios. Como en 1962, Belaúnde recurrió a evocar la geografía del país y sus posibilidades de desarrollo, al mismo tiempo que se presentaba tolerante con las diferentes tendencias políticas e intereses sociales. Es decir, que a diferencia de sus contendores, no era un "búfalo" ni un "gerente", sino un hombre con "señorío" "que sabía hablar bien"; no era ni un "sectario", ni un "patrón", era un profesional liberal y pluralista. Así, Belaúnde sintetizaba una imagen oligárquica, señorial, con la de un representante de los sectores medios que buscan incorporarse a la vida política del Estado. A esto se sumó el anti-aprismo de los sectores populares, que para defender su relativa autonomía apoyaron a Acción Popular en las elecciones.

En la escena política se revivió una situación en la que los personajes de la década de 1960 recuperaron vigencia. La población volvía a concentrarse alrededor de estos jefes políticos, rechazando la declaración de defunción que Velasco y los suyos habían decretado a las organizaciones partidarias tradicionales.

¿Qué había sucedido? ¿Los cambios "estructurales" realizados durante la "primera fase" no habían cambiado la orientación política de los peruanos? ¿Cómo explicar la ninguna significación electoral de los herederos del velasquismo? Los ideólogos de ese régimen habían asegurado, irresponsablemente, que la "transferencia de la propiedad" significaba una "transferencia del poder político" a los trabajadores. Se ha visto antes la significación real y las consecuencias de estas "transferencias". Además, la cosificación del poder y el mecanicismo de este planteamiento no podían ser más ingenuos, por decir lo menos.

La incapacidad del GRFA para organizar su partido político, así como la impotencia para construir un sistema político corporativo, destinado a asegurar la dominación social, dejaron al desnudo la naturaleza autoritaria del gobierno militar. Esto significó que la ciudadanía no contara con los medios institucionales de representación legítima y eficiente para lograr la mediación de sus reclamos ante el Estado. De ahí los sistemáticos y exitosos enfrentamien-

tos populares contra el gobierno militar y el desarrollo de la autonomía política de los sectores movilizadas de las clases populares.

Los militares y sus asesores a cargo de las nuevas y múltiples instancias administrativas no tuvieron necesidad, ni interés, en crear una red institucional de mediación política con la ciudadanía. Al fin y al cabo, la promoción de oficiales, técnicos e ideólogos no guardaba relación con su capacidad de representación, sino del clientelaje, es decir de su inserción en uno de los grupos de poder militar y concretamente de su dependencia personal de Velasco o cualquier jefe militar.

De este modo el GRFA dejó un vacío institucional que los partidos "tradicionales" ocuparon, al postulante como medios para articular, canalizar y satisfacer los intereses de los distintos sectores movilizadas de las clases sociales, que los militares no habían querido ni podido representar.

Sin embargo, lo nuevo del panorama político fue la presencia de masas populares que se movilizaban al compás de la penetración del capitalismo y del Estado en la sociedad y que fueron congregándose alrededor de diferentes grupos de la izquierda revolucionaria. El abandono que hicieron el APRA y Acción Popular de las luchas populares contra el gobierno militar y el apoyo, no tan crítico, del Partido Comunista a los militares, facilitó el engarce entre

las masas populares y la izquierda e hizo posible que en las elecciones de la Asamblea Constituyente los grupos de izquierda obtuvieran el respaldo de aproximadamente una tercera parte del electorado.

Durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, las agrupaciones de izquierda se mostraron ineficaces para hacer efectivas las reivindicaciones populares, gracias al bloqueo y oposición sistemática del gobierno y de sus nuevos aliados, el APRA y el PPC.

A principios de 1980, ante la presión de las bases populares, los dirigentes de los grupos de izquierda iniciaron los trámites para su unificación en un solo bloque electoral, para estar en condiciones de contrarrestar la multimillonaria campaña de sus contendores de la derecha. Sin embargo, la "Alianza Revolucionaria de la Izquierda" se pasmó pocos días antes del cierre de las inscripciones electorales, en febrero de 1980, ante las diferencias que se presentaron en las cúpulas dirigentes por la ubicación de sus representantes en las listas parlamentarias. Estas diferencias entre las diversas organizaciones de izquierda estuvieron convenientemente sazonadas con altisonantes y pretendidos discursos ideológicos, que ni sus bases aceptaron como justificación. Ocurrió que cada agrupación de izquierda intentó obtener el máximo de ventajas al igual que en los otros partidos, donde la ubicación de los candidatos en las listas parlamentarias fue decidida por sus respectivos jefes. A dife-



rencia de lo que aconteció en éstos, en la izquierda no había uno, sino muchos jefes, ninguno con autoridad suficiente para imponerse.

Así, la tradicional práctica política oligárquica se hizo presente también en estas nuevas organizaciones, incapacitándolas para ofrecer una alternativa que convocara las esperanzas de las heterogéneas clases populares en un frente que albergara mancomunadamente sus intereses.

De esta manera se estableció una suerte de paradoja política. La nueva clase económicamente dominante que emerge en la configuración social, a raíz de los cambios provocados por el GRFA, no ha logrado establecer un dominio político directo. Las clases populares, que han obtenido un significativo avance en su organización, no han conseguido cristalizarse políticamente. En cambio, Acción Popular que pretende representar de manera vaga y confusa los intereses de las distintas clases, es la que contó con el respaldo ciudadano, dejando entrever la "vocación" populista de la sociedad peruana.

La imagen de ineficacia que presentaron las izquierdas condicionó para que un considerable número de electores, que en 1978 las apoyaron, transfirieran su respaldo a Belaúnde, que resultaba ser el candidato "menos malo". Además, esa imagen determinó que entre los simpatizantes de la izquierda cundiera un sentimiento de inseguridad en la capacidad

de sus organizaciones para enfrentar con éxito un eventual gobierno aprista. De ahí que alrededor del 7% del 42% de los votos que recibiera la candidatura presidencial de Acción Popular, proviniera de electores que votaron por listas parlamentarias de izquierda.

La dispersión de la izquierda modificó sustantivamente la escena política a fines de febrero. Su aglutinamiento habría significado la polarización entre la izquierda y la derecha, creando la seria posibilidad que ningún candidato a la Presidencia llegara a contar con el 36% necesario para ser elegido, debiendo recurrirse a una segunda vuelta en el Congreso, que habría creado una situación de inestabilidad, con la abierta y determinante presencia de la fuerza armada en la vida política del país.

El rotundo triunfo de la candidatura de Belaúnde parece favorecer el desarrollo de una perspectiva de insólita estabilidad institucional. En efecto, tal como un alto jefe militar lo declarara, esta situación permite que se inicie un *relevo* gubernamental. Primero, la Junta Militar reconoció al nuevo Presidente, que la fuerza armada depusiera doce años atrás. Se celebran reuniones "informativas" de los ministros salientes con sus posibles reemplazos. Se entablan conversaciones entre los dirigentes de Acción Popular y los mandos militares para contemplar la continuidad de éstos y la formalización de las relaciones entre "gobernantes" y fuerzas armadas,

a través de un organismo similar al Consejo de la Defensa Nacional norteamericano, en la que los ministros "civiles" y los "militares", conjuntamente con el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, se pondrían de acuerdo sobre los problemas que concierne a "ambas instituciones", manteniéndose así una suerte de dualidad de poderes y la autonomía castrense. De este modo, la actividad gubernamental seguiría condicionada por los intereses y perspectivas de los militares, limándose asperezas y tensiones entre "civiles y militares".

El Presidente electo invitó a sus dos contendores principales, APRA y PPC, a participar en las responsabilidades de gobierno, a través de un gabinete de "ancha base" política. Villanueva, frustrado por la derrota electoral y los conflictos partidarios internos rechazó la oferta, manifestando su decisión de participar en una "oposición leal". Bedoya, en cambio, aceptó tal participación solicitando los ministerios vinculados a la producción. Paralelamente, hasta mediados de junio de 1980 hay versiones de la posible designación de ministros "técnicos independientes", e incluso de políticos de izquierda.

Por último, el Presidente electo concede audiencias a diferentes representaciones gremiales, entre las que destaca el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SUTEP) y la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (FETIMP), dos de las organizaciones sindicales más combativas de la úl-

tima década, controladas por dirigentes de la izquierda revolucionaria, que han sufrido la permanente represión del gobierno militar.

Todas estas actividades buscan ratificar la versión liberal y pluralista del mensaje belaundista, dirigido a institucionalizar la vida política, en un intento de ordenar y afinar los instrumentos para establecer una nueva modalidad de dominación política que permita el desarrollo concertado y fluido del nuevo modelo de acumulación capitalista. En este sentido, el próximo Premier y ministro de Economía, Manuel Ulloa, en una entrevista afirmó "yo creo que lo primero que hay que buscar es un concierto político".

Queda por saber si todos los instrumentos tocarán la misma melodía y al mismo ritmo. La consolidación de los nuevos intereses de la burguesía, las crecientes expectativas y la participación política de nuevos y más amplios sectores populares que la campaña electoral favoreció, se enfrentan a la recesión de la economía capitalista mundial, haciendo dudar que el próximo gobierno pueda contar con el suficiente espacio, durante un período relativamente largo, para imponer la institucionalización de un consenso político. De ahí que no sea de extrañar el desarrollo de una contradicción entre la nueva "legalidad" y la "necesidad" de violarla para hacer posible el desarrollo capitalista y el sistema de dominación clasista (junio 1980).

El texto de este libro se presenta en caracteres Caledonia de 10 p. con 2 p. de interlínea. Las citas al pie de página en 8 p. con 1 p. de interlínea. Los títulos de capítulos en Garamand de 18 p. La caja mide 20 x 32 picas. El papel empleado es Obra T. de 65 grms. Su impresión concluyó el 30 de junio de 1980 en los talleres de INDUSTRIAL*gráfica* S.A. Chavín 45, Lima 5.

Serie: COLECCION MINIMA

1. Richard M. Morse/Joaquín Capelo  
*Lima en 1900*  
*Estudio crítico y Antología*  
Lima, IEP ediciones 1973, 200 págs.
2. Giorgio Alberti, Heraclio  
Bonilla, Julio Cotler,  
Alberto Escobar, José Matos Mar  
*Educación y desarrollo rural*  
Lima, IEP ediciones 1974, 56 págs.
3. Juan Martínez Alier  
*Los huacchilleros del Perú*  
Lima, París, IEP-Ruedo Ibérico  
1973, 100 págs.
4. Heraclio Bonilla  
*El minero de los Andes*  
Lima, IEP ediciones 1974, 89 págs.
5. José Matos Mar, José M. Mejía  
*Reforma agraria: logros y  
contradicciones 1969 - 1979*  
Lima, IEP ediciones 1980, 138 págs.
6. José María Caballero  
*Agricultura, reforma agraria y  
pobreza campesina*  
Lima, IEP ediciones 1980, 158 págs.
7. Elena Alvarez  
*Política agraria y estancamiento  
de la agricultura, 1969 - 1977*  
Lima, IEP ediciones 1980, 92 págs.